

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

# **Reestructuración económica y distribución del ingreso en Argentina (1974-2003).**

Benza, Gabriela; Calvi, Gabriel.

Cita:

Benza, Gabriela; Calvi, Gabriel (2004). *Reestructuración económica y distribución del ingreso en Argentina (1974-2003)*. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/110>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

---

## **Reestructuración económica y distribución del ingreso en Argentina (1974-2003)**

Benza, Gabriela  
Calvi, Gabriel  
FCS-UBA

---

### **Introducción**

Durante el último cuarto de siglo la Argentina ha sido escenario de un proceso de reestructuración económica y social sin precedentes. Lejos estamos hoy de aquella remota época, vinculada al modelo de desarrollo conocido como industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), en la cual la estructura social argentina se diferenciaba del resto de las configuraciones societales latinoamericanas por su relativa homogeneidad, su estructura distributiva más igualitaria y su capacidad de integrar a la mayor parte de la población en el mundo del trabajo.

La última dictadura militar (1976-1983) ha sido considerada impulsora de un proyecto básicamente impopular y regresivo que sentó las bases para el cambio del modelo de acumulación doméstico. Las opciones de política que predominaron en esa época significaron el inicio de una nueva etapa caracterizada por una progresiva retirada del Estado de sus funciones económicas, un cambio sustancial en el perfil y modo de funcionamiento de la estructura productiva local y un punto de no retorno al patrón de desarrollo anterior. Los principales emergentes de esta etapa, la desindustrialización, la concentración-centralización de capitales y el endeudamiento externo masivo en el marco de una alta liquidez internacional definirán los límites del desempeño económico posterior.

Los resultados de esta primera fase de reestructuración no fueron promisorios. La reversión circunstancial de los flujos de capitales a la región hacia 1981 y, posteriormente, la crisis desatada por el default mexicano, en agosto de 1982,

evidenciaron la fragilidad del nuevo modelo. El desempeño económico del período en su conjunto no es ajeno a la vulnerabilidad arriba señalada. Mientras que en la etapa precedente, la segunda fase de la ISI (1958-1975), el producto bruto interno (PBI) crecía a razón del 4,4% anual, durante el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) el crecimiento anual descendió al 1,3% en promedio. Por su parte, el PBI per cápita, indicador considerado más adecuado para dar cuenta del grado de desarrollo de una economía, se redujo un 3,4% entre 1976 y 1983.<sup>i</sup>

No obstante las grandes expectativas generadas en torno a la transición democrática (1983-1989), la Argentina no pudo retomar el sendero del crecimiento sostenido y la década del '80 estuvo signada por erráticas opciones de política que intentaban revertir el estancamiento crónico. El enfriamiento de la economía y la caída del PBI per cápita constituyen claros síntomas de una década perdida en materia de desarrollo: el PBI se redujo a una tasa promedio del 0,5% anual; la fuerte involución del PBI per cápita no tenía precedentes históricos, su deterioro alcanzó la alarmante cifra de 12,5% a lo largo de esos seis años.

La crisis fiscal, el régimen de alta inflación y las dificultades para afrontar los pagos externos en el contexto de reversión de flujos financieros internacionales se combinaron, durante los '80, en un escenario altamente delicado. En este escenario el gobierno perdía progresivamente su autonomía frente a los organismos financieros internacionales y a los grupos concentrados locales, que comenzaban a incidir fuertemente en la definición de los principales lineamientos de política económica. La intensificación de este clivaje de intereses culminó, hacia 1988, en una moratoria de hecho con los acreedores externos y, hacia 1989, en una corrida contra la moneda local que desató un proceso hiperinflacionario, cuya principal consecuencia fue el adelanto del traspaso del gobierno hacia julio de ese año.

Las opciones ortodoxas de política económica, que habían comenzado a manifestarse durante los últimos años del gobierno de la transición democrática, adquirieron un consenso tan inesperado como incuestionado en los albores de la década del '90. El folklore populista de las campañas presidenciales contrastaba abiertamente con las principales decisiones que, en materia económica, tomaba la nueva administración y que reflejaban, a la vez que profundizaban, la injerencia de los acreedores externos y los grupos concentrados locales sobre las esferas gubernamentales. En continuidad con lo ocurrido durante la última dictadura militar, el conjunto de medidas instrumentadas en los '90 profundizaba la reestructuración económica de los '70 en sus principales ejes. Retirada del Estado, desindustrialización, concentración-centralización de capitales, endeudamiento externo masivo y vulnerabilidad externa volvían a convergir entre los resultados globales del período, ahora combinados con un proceso de extranjerización de empresas otrora de capitales locales –privados o estatales–, en un contexto inédito de estabilidad de precios asociado al anclaje del tipo de cambio –que se prolongaría por diez años.

La senda del crecimiento, que parecía haberse retomado en los primeros años de la década, se desvaneció hacia 1995, cuando se hizo manifiesta la vulnerabilidad del modelo a los embates de la coyuntura internacional. Al igual que a principios de los '80, una fuerte reversión de flujos financieros –que habían vuelto a la región desde comienzos de la década por efecto de la caída en las tasas de interés internacionales– desencadenó una reversión del ciclo económico, poniendo en tela de juicio la sustentabilidad del nuevo modelo. Si bien la economía volvió a crecer luego de la fase recesiva hasta 1998, la asociación entre crecimiento y desarrollo no resultaba tan clara. No obstante el notable crecimiento experimentado en esta década –del orden del 4,1% anual–, hacia 1999 el PBI per cápita sólo superaba al

registrado en 1974 en un 7,5%. Asimismo, la recesión iniciada hacia fines de 1998 se extendería por cuatro años, resultando así, en la más prolongada y profunda de la Argentina moderna.

El desgaste del modelo acompañó al nuevo gobierno (1999-2001). A lo largo del breve y trunco mandato de la nueva administración, los intentos por lidiar con la crisis se cristalizaron en sucesivos paquetes de medidas, la mayoría de los cuales tenía por objetivo conservar los lineamientos heredados de la década anterior, con el horizonte puesto en seducir a los capitales que, progresivamente, abandonaban la región. Los seis paquetes de medidas impulsados en el período intensificaron no solamente la crisis sino también la conflictividad social y la puja de intereses de los actores económicos fundamentales. El final, largamente anunciado, no se hizo esperar y, tras un breve interludio –durante el cual uno de los gobiernos provisionales declaró el default argentino– llegó al poder un gobierno de transición (2002-2003) que no dudaría en abandonar la convertibilidad monetaria.

La modificación de la pauta cambiaria contribuyó a redefinir el conjunto de incentivos que orientaban a los actores económicos fundamentales. En el corto plazo, la devaluación mejoró las cuentas externas incrementando el superávit de la balanza comercial. Tal mejoría no tuvo sus fundamentos –por lo menos en el corto plazo– en algún incentivo a las exportaciones sino, por el contrario, en una pronunciada reducción de las importaciones producto de la intensificación de la recesión. En el mediano plazo, el incentivo para la sustitución de importaciones daría nuevos bríos a la producción doméstica y, luego de cuatro años, la Argentina volvería a crecer. El saldo del período, altamente negativo –1,8% de caída anual promedio del PBI–, esconde el deterioro profundo de la economía durante los tres primeros años del nuevo milenio: entre 2000 y 2002 el PBI se redujo a razón de un

5,4% anual. El PBI per cápita, por su parte, disminuyó más de un 18% en esos tres años y más de un 12% durante la totalidad del período.

**Cuadro 1**  
**Distribución del ingreso para distintas poblaciones. GBA, 1970-2003**

Año	Coeficientes de Gini				Promedio de CG			
	ITF	IPCF	ITI	IOP	ITF	IPCF	ITI	IOP
1953*	0,400	s/d	s/d	s/d				
1961*	0,419	s/d	s/d	s/d	-	-	-	-
1963**	0,358	s/d	s/d	s/d				
1970***	0,361	s/d	s/d	S/d	0,359	<b>0,339</b>	0,362	0,325
1974	0,357	0,339	0,362	0,325				
1980	0,413	0,385	0,413	0,387				
1981	0,426	0,417	0,421	0,405	0,419	<b>0,404</b>	0,414	0,393
1982	0,418	0,411	0,408	0,387				
1984	0,430	0,422	0,423	s/d				
1985	0,411	0,400	0,419	0,391				
1986	0,421	0,409	0,430	0,396	0,437	<b>0,435</b>	0,445	0,419
1987	0,433	0,434	0,447	0,410				
1988	0,431	0,441	0,448	0,425				
1989	0,493	0,502	0,501	0,474				
1990	0,438	0,455	0,431	0,405				
1991	0,441	0,451	0,442	0,394				
1992	0,432	0,434	0,436	0,390				
1993	0,433	0,437	0,438	0,399				
1994	0,433	0,449	0,439	0,395	0,443	<b>0,462</b>	0,448	0,411
1995	0,454	0,474	0,463	0,423				
1996	0,449	0,476	0,459	0,418				
1997	0,447	0,475	0,449	0,415				
1998	0,459	0,489	0,464	0,443				
1999	0,447	0,481	0,459	0,430				
2000	0,456	0,496	0,463	0,437				
2001	0,473	0,516	0,474	0,461	0,473	<b>0,518</b>	0,477	0,464
2002	0,482	0,529	0,489	0,478				
2003****	0,479	0,531	0,480	0,479				

Fuente: Cálculos en base a los cuadros 26, 27, 28 y 29, GBA, EPH, ondas octubre.  
 \* Fuente: CONADE-CEPAL (1965). Total del país. Citado por Altimir y Beccaria (2001).  
 \*\* Fuente: EPC(IG). Cálculos para el GBA. Citado por Altimir y Beccaria (2001).  
 \*\*\* Fuente: EED(EI). Cálculos para el GBA. Citado por Altimir y Beccaria (2001).  
 \*\*\*\* Fuente: Cálculos en base a los cuadros 26, 27, 28 y 29, GBA, EPH, onda mayo.

La evolución de la desigualdad de ingresos no ha sido ajena a las grandes transformaciones estructurales operadas desde mediados de la década del '70. Sujeta a las modificaciones de los principales indicadores socioeconómicos, la dispersión de los ingresos registró deterioros, estancamientos y mejoras en cada una de las distintas coyunturas. Sin embargo, como se desprende de la lectura del

Cuadro 1, el balance del período en su conjunto resulta altamente desalentador.<sup>ii</sup> Entre 1974 y 2003 los índices de dispersión del ingreso total familiar (ITF) y del ingreso per cápita familiar (IPCF) se deterioraron en un 34% y 57%, respectivamente. Por su parte, la comparación de la desigualdad de los ingresos totales individuales (ITI) y de los ingresos de la ocupación principal de los ocupados (IOP) entre los mismos años da cuenta de deterioros igualmente significativos (33% y 47% del coeficiente de Gini).<sup>iii</sup>

Resulta interesante, con los datos presentados hasta el momento, destacar el quiebre que se produce en la distribución del ingreso a partir de 1980.<sup>iv</sup> Específicamente, si nos concentramos en la desigualdad relativa al IPCF – generalmente seleccionada como más relevante para el estudio del bienestar de una población– observamos que si sobre el final de la segunda fase de la ISI el nivel de desigualdad se encontraba en el orden del 0,34 del coeficiente de Gini (CG), desde principios de la década perdida en adelante el guarismo superará sensiblemente el valor de 0,40.<sup>v</sup> A partir de ese momento, se registra un deterioro persistente de la distribución del IPCF, del cual no constituye excepción ninguna de las etapas referenciadas en esta introducción: si el promedio del CG durante el gobierno de la transición democrática se encontraba un 8% por encima del registrado en la etapa anterior, durante los '90 el indicador se deteriorará un 6% y durante los primeros años del nuevo milenio el promedio ascenderá un 12%.

Los datos presentados en el Cuadro 1 tienen la virtud de permitirnos extender la serie que surge de las tabulaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) hasta el año 1970. Sin embargo, debe destacarse que tales tabulaciones sólo refieren a la población (hogares o personas) con ingreso: buena parte de los inactivos y de los desocupados, así como el conjunto de los hogares con ingreso cero son deliberadamente excluidos del análisis. Asimismo, los cálculos del CG que

parten de datos agregados –en grupos decélicos, por ejemplo, como los que surgen de las tablas del INDEC– tienden a subestimar los niveles de desigualdad.

En este trabajo intentaremos contribuir al estudio de las transformaciones de las últimas décadas abordándolas desde una doble perspectiva. Es nuestra intención analizar la evolución de la distribución del ingreso a la luz de los cambios recientes en el modo de funcionamiento de la economía. En cada uno de los apartados siguientes examinaremos brevemente las principales opciones de política económica de cada período con el propósito de dar cuenta de su impacto sobre el desempeño económico y sobre el patrón de distribución del ingreso. Prestaremos especial atención a los efectos distributivos desencadenados por las opciones de política impulsadas por el gobierno de la transición (2002-2003) con el objetivo de detectar cambios o continuidades en las tendencias de los últimos años.

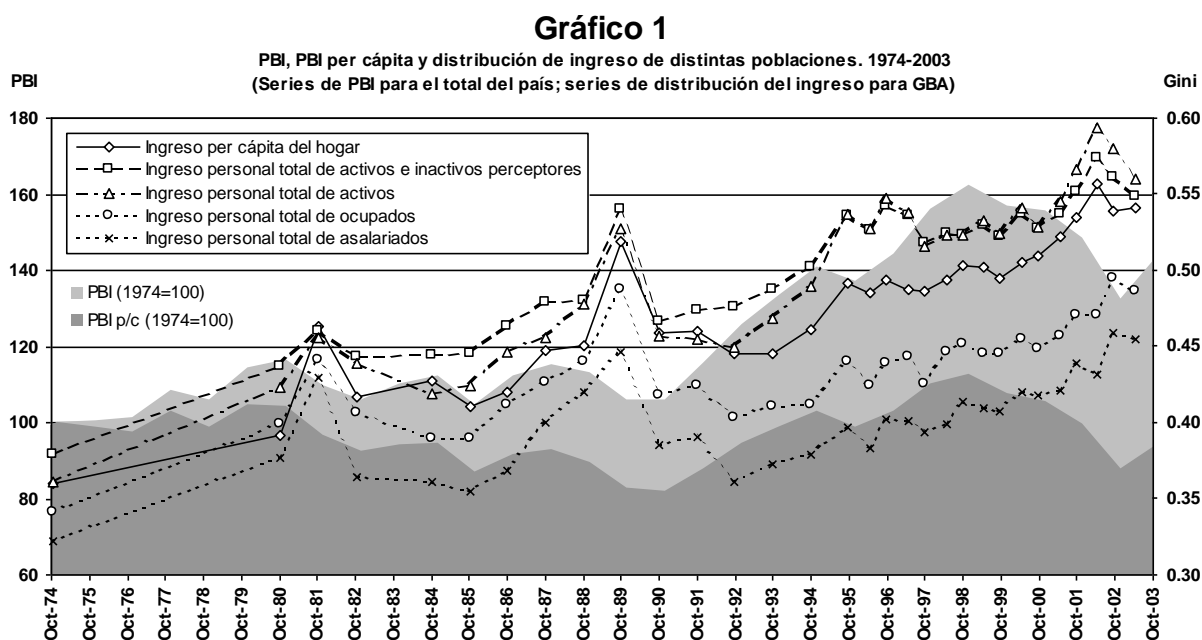
Para evaluar las alteraciones de la distribución del ingreso, hemos optado por una metodología relativamente estandarizada consistente en la comparación de CG para distintas poblaciones.<sup>vi</sup> Dadas las limitaciones que presentan los datos que surgen del Cuadro 1 arriba señaladas, las medidas resumen utilizadas en este trabajo fueron elaboradas con información que surge del procesamiento de los datos desagregados de la EPH para el aglomerado GBA (Capital Federal y Conurbano), para los años 1974 a 2003, contemplando a la población sin ingresos.<sup>vii</sup>

### **Evolución secular de la distribución del IPCF y ciclos de desigualdad**

El Gráfico 1 presenta la evolución de la distribución del IPCF y de los ingresos individuales de distintas poblaciones, calculados con datos desagregados, para los años 1974-2003. En este gráfico es posible observar, en términos generales, tendencias similares a las que registran los cálculos con datos agregados presentados en el Cuadro 1. Sin embargo, el indicador calculado en base a datos



desagregados hace más evidente cierta evolución cíclica de la dispersión de ingresos, que se encuentra claramente asociada a los avatares del desempeño económico: la desigualdad es, pues, altamente sensible a los cambios en la coyuntura económica.



Fuente: elaboración propia; para el cálculo del CG, EPH, GBA, ondas octubre años 1974 a 2002 y ondas mayo años 1996 a 2003; para PBI y PBI per cápita, datos para el total del país años 1974-2003.

En el marco de la tendencia al deterioro persistente de la distribución del IPCF, los años 1981, 1989, 1995 y 2002 resultan especialmente críticos: entre octubre de 1980 y octubre de 1981, la desigualdad del IPCF se incrementó un 18%; hacia el mismo mes de 1989, el deterioro interanual del indicador era del 15%; entre octubre de 1994 y octubre de 1995 y entre mayo de 2001 y mayo de 2002, el incremento anual del CG fue del orden del 7%. Cada uno de estos saltos registrados en la distribución del IPCF responde a coyunturas particulares, vinculadas a las últimas grandes crisis de la economía local. No obstante luego de estos importantes picos redistributivos la desigualdad tiende a atenuarse sensiblemente, los niveles de concentración del IPCF difícilmente mejoran más allá de los registrados durante el

período inmediatamente anterior a cada crisis. De este modo, las crisis distributivas y las eventuales recuperaciones posteriores tienden a apuntalar, en nuestro país, los niveles de desigualdad alcanzados durante la etapa precedente y, en este sentido, tales crisis pueden ser tenidas por puntos de inflexión que consolidan nuevos pisos distributivos, a partir de los cuales evoluciona la situación posterior.

De estas consideraciones se desprende que al interior de la evolución de largo plazo de la distribución del IPCF es posible detectar distintos ciclos de desigualdad. Por tanto, un análisis de la desigualdad debe dar cuenta no sólo de las tendencias de su evolución secular, sino también de aquellas singularidades que diferencian a cada uno de los ciclos en los que se descompone. En lo que sigue –el examen de la incidencia de las opciones de política sobre la evolución de la distribución del ingreso–, se tomará como referencia temporal la periodización que se desprende de los ciclos de desigualdad señalados anteriormente. En cada uno de estos ciclos, las opciones de política económica incidirán sobre la dispersión del IPCF cuando sus efectos macroeconómicos modifiquen la evolución de los factores que explican tal dispersión.

Dos tipos de factores socioeconómicos contribuyen a modificar la desigualdad del IPCF: por un lado, los cambios en la dispersión de los ingresos individuales de los miembros perceptores del hogar, y, por el otro, las modificaciones en las tasas de actividad y desocupación de los hogares. Por ejemplo, un incremento en las tasas de desocupación que afecte fundamentalmente a los hogares de menores ingresos tendrá como resultado (*ceteris paribus*) un incremento de la desigualdad del IPCF. Asimismo, un deterioro en la distribución de los ingresos individuales tendrá (*ceteris paribus*) un efecto similar. El análisis que sigue tomará en cuenta estos dos grandes factores y su contribución diferencial a la desigualdad en cada uno de los períodos considerados. Para ello compararemos, por un lado, la evolución de la distribución

del ingreso de distintas poblaciones de perceptores –activos e inactivos; activos; ocupados, y asalariados– y, por el otro, las tasas de actividad y desocupación de los distintos deciles de IPCF.<sup>viii</sup>

## **Ciclo de desigualdad 1974-1981**

### ***Opciones de política y desempeño económico durante el PRN***

Con el propósito explícito de eficientizar la asignación de recursos en la estructura productiva doméstica, el régimen burocrático-autoritario<sup>ix</sup> de 1976 se impuso como objetivo la virtual transformación del patrón de desarrollo vigente hasta el momento, considerado origen de la inestabilidad económica y política crónica. No obstante los distintos proyectos que se disputaban la hegemonía al interior de las FFAA,<sup>x</sup> la orientación que progresivamente devendría predominante buscaría producir un cambio radical en el modo de funcionamiento de la economía a partir de la reducción de la intervención estatal en el mercado.

Las primeras medidas implementadas durante el PRN no se apartaban, en sus efectos, del esquema clásico de estabilización característico de la ISI. Liberación de precios y congelamiento salarial, se combinaban hacia 1976 como principales herramientas en materia económica las cuales, antes que un cambio drástico, significaron una recomposición en las condiciones de funcionamiento del modelo económico.<sup>xi</sup> En este sentido, la única modificación sustancial con relación a los planes precedentes fue debida al fuerte ajuste salarial operado en esta primera etapa –opción más que viable en el marco de un régimen *de facto*–, por el cual los salarios reales sufrieron una caída del orden del 36% en relación al año anterior.<sup>xii</sup>

La persistencia del régimen de alta inflación, sumada a la preponderancia de los diagnósticos de corte monetario desarrollados desde el equipo económico de Martínez de Hoz, llevaría al gobierno a impulsar, desde 1977 y hasta 1981, un nuevo

conjunto de medidas que contribuirían a modificar el esquema de incentivos de los principales actores económicos. Reforma financiera, restricción monetaria y apertura comercial se erigirían, desde entonces, como pilares del nuevo ordenamiento económico. El limitado efecto de este nuevo esquema sobre la persistente escalada de precios –la inflación durante 1978 alcanzaría el 170% del índice de precios al consumidor–, llevaría al equipo económico a sumar –hacia fines de ese año–, como instrumento antiinflacionario, un sistema de devaluaciones programadas del tipo de cambio (tablita) que, junto con la aceleración de la apertura comercial, debía tender a igualar la inflación interna a la internacional. Sin embargo, la desaceleración de los precios internos resultó menor a la esperada por el equipo económico y, con el paso del tiempo, se profundizó un significativo atraso cambiario.

El conjunto de herramientas macroeconómicas desplegadas hasta ese momento tuvo como resultado una fuerte modificación de los precios relativos que desató una intensa transferencia de recursos entre sectores de la economía: mientras que apertura comercial y retraso cambiario tuvieron por efecto la quiebra de numerosas empresas industriales y la concentración en pocas manos de la actividad fabril, la reforma financiera reorientó excedentes al mercado de dinero e incentivó un sustancial incremento de la deuda externa privada y pública.

Hacia fines de 1980 la sobrevaluación de la moneda local y la reversión de los flujos de capital internacional deterioraron las expectativas de los agentes económicos en torno al mantenimiento del esquema cambiario. Este contexto acentuó la retirada de fondos de las entidades financieras locales provocando una vertiginosa corrida contra el peso. La devaluación llegó, finalmente, a principios de 1981, dando inicio a una fase económica recesiva y, con el abandono de la tablita, comenzaría una nueva etapa de “ajuste caótico”,<sup>xiii</sup> caracterizada por intentos de estabilizar la balanza de pagos con sucesivas modificaciones en la pauta cambiaria

y por acciones orientadas a compensar el sobreendeudamiento externo e interno del sector privado.

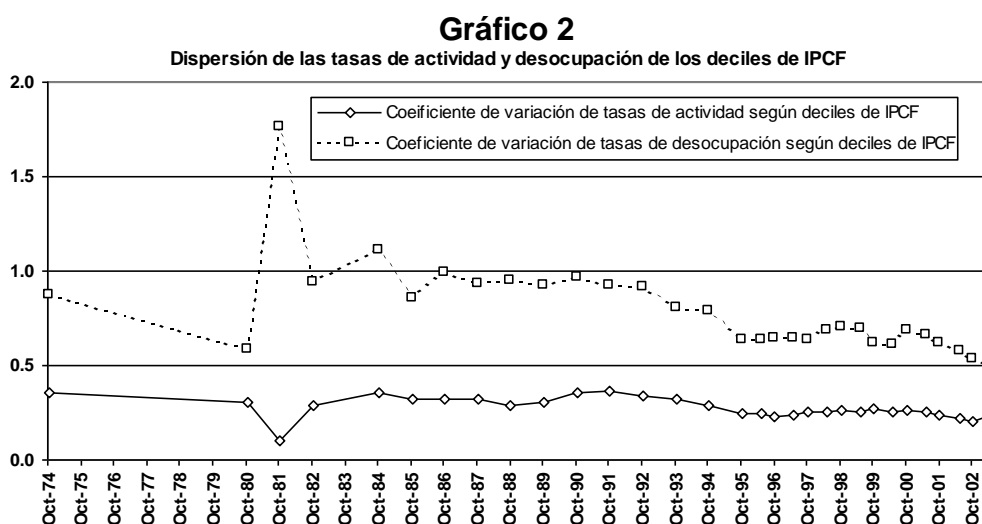
La licuación de deuda interna privada y la implementación de los seguros de cambio (que llevaron a estatizar buena parte de la deuda externa privada) característicos de este período, se sumaron a los diversos mecanismos a través de los cuales el gobierno transfería recursos al sector concentrado local desde 1976 (promoción industrial y sobreprecios en las compras del Estado). El resultado conjunto de estos mecanismos fue la participación activa del Estado como centro de un gigantesco dispositivo de transferencias patrimoniales.<sup>xiv</sup>

### ***El deterioro salarial como origen de la desigualdad de ingresos***

Una de las particularidades con las que, a partir de los datos disponibles, podemos caracterizar al período 1974-1980 es un importante incremento de la desigualdad de ingresos en general (ver Gráfico 1). A pesar de que entre esos años se observa un crecimiento del PBI del orden del 16%, dicho incremento de la actividad económica no produjo algún tipo de mejora en la dispersión de los ingresos. En especial, la distribución del IPCF se deterioró en un 9% del CG. Es notable, también durante esta etapa, que tal deterioro fue sensiblemente menor que el de las distribuciones de ingresos personales, que registraron incrementos de entre el 15% y el 17%.

Esta diferencia de evolución entre los indicadores para el IPCF y los relativos a los ingresos individuales encuentra su origen, fundamentalmente, en las variaciones de las tasas de actividad y, en menor medida, de las tasas de desocupación que, en ambos casos, favorecen a los hogares de menores ingresos (ver Tablas A y B del Anexo estadístico). Mientras que la tasa de actividad para los cinco deciles de mayor IPCF cae en un 5%, la correspondiente a los deciles más pobres experimenta un

leve incremento (del orden del 1%). Por su parte, si bien las tasas de desocupación durante esta etapa se encuentran en niveles bajos y sus variaciones no inciden fuertemente sobre la dispersión del IPCF, es posible detectar una modificación diferencial que favorece a los deciles de IPCF peor posicionados: entre los deciles de menores ingresos la desocupación se reduce un 15% más que entre los de mayores ingresos. En el Gráfico 2, se representan estas variaciones diferenciales en las tasas de actividad y desocupación.



Fuente: Elaboración propia en base a EPH, GBA, 1974-2002 onda octubre y 1996-2003 onda mayo.

Con relación a los ingresos individuales el deterioro distributivo se experimenta por igual en todas las poblaciones consideradas, por lo cual, la mayor concentración estaría asociada a las variaciones de los ingresos totales de la población de menor nivel de agregación, es decir, de los asalariados (ver Gráfico 1). De este modo, el deterioro del CG de los asalariados, del orden del 17%, arrastra al deterioro a las demás poblaciones (ocupados; activos, y activos e inactivos con ingresos). Dado que para este período nuestros datos sólo registran las modificaciones en la desigualdad de la totalidad de los ingresos de los asalariados, no podemos, con ellos, distinguir cuál es el origen de tales variaciones: las mismas pueden deberse,

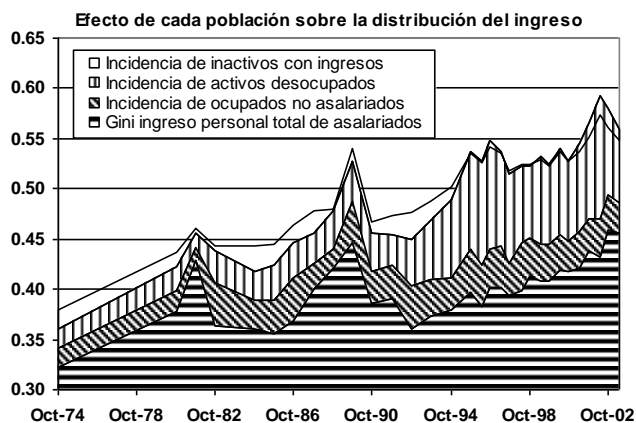
entre otros factores, a modificaciones en el ingreso de fuentes no laborales, a variaciones en la cantidad de ocupaciones de los asalariados, a cambios en sus remuneraciones horarias, etc. Sin embargo, las evidencias aportadas por Altimir y Beccaria (2001) indican que son, justamente, las transformaciones en las remuneraciones horarias las que impulsan este deterioro de los ingresos de los asalariados. Más aún, estos autores señalan que dichas diferencias en las remuneraciones horarias reflejan, principalmente, la ampliación de las distancias entre las remuneraciones de personas con diferente nivel educativo.<sup>xv</sup>

De lo dicho en el apartado anterior, podemos aventurar una forma de interpretar el comportamiento de la desigualdad de los ingresos de los asalariados en esta etapa. Dado el congelamiento de los salarios nominales, el contexto inflacionario y la suspensión de los mecanismos de negociación salarial (convenciones colectivas), la caída del salario real signó el período. En tal contexto y en una coyuntura cercana al pleno empleo, los asalariados de mayores niveles de calificación se habrían encontrado en mejores condiciones ante sus empleadores para recomponer sus remuneraciones horarias nominales que aquellos asalariados de menores calificaciones, dando lugar a un proceso de estratificación salarial.

Hacia 1981, en el marco de las importantes devaluaciones que siguieron a la crisis del programa monetario de Martínez de Hoz, la desigualdad del IPCF experimentó, en un solo año, un salto del orden del 18% del CG. En el Gráfico 1 se observa que tal incremento de la desigualdad, a diferencia de lo ocurrido entre 1974 y 1980, fue sensiblemente mayor al registrado por las distribuciones de ingresos personales, que se deterioraron entre un 5% y un 14%. El mayor deterioro del IPCF se explica por un fuerte incremento en la dispersión de las tasas de desocupación de los distintos deciles de IPCF, que no pudo ser compensado por la caída en la dispersión de las tasas de actividad: mientras que la tasa de desocupación de los

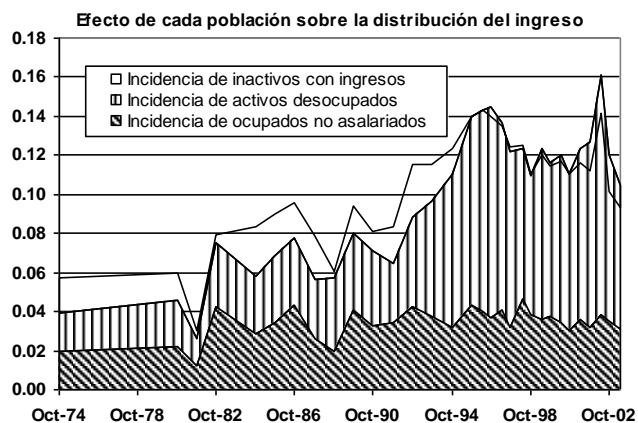
cinco deciles de menores ingresos se incrementó en un 20%, la de los cinco deciles mejor posicionados disminuyó un 56% (Tabla B del Anexo estadístico).

**Gráfico 3**



Fuente: CG del Gráfico 1.

**Gráfico 4**



Fuente: CG del Gráfico 1.

En cuanto a la concentración de los ingresos individuales, al igual que entre 1974 y 1980, quienes arrastran hacia el deterioro al CG son los asalariados (Gráfico 3). El incremento de la desigualdad en esta población (14% del CG) estaría asociado a la escasa capacidad de recomposición de las remuneraciones en un contexto de devaluación y de no vigencia de convenios colectivos, que intensificaba, por tanto, el proceso de estratificación salarial arriba señalado. Por su parte, el efecto sobre la dispersión de los ingresos personales ejercido por los ocupados no asalariados, en su mayoría cuentapropistas, contrarresta la mayor concentración impulsada por los asalariados (Gráfico 4). El hecho de que el incremento de la desigualdad de los ocupados (asalariados y no asalariados) sea menor que el de los asalariados da cuenta de un efecto igualador, en términos relativos, vinculado a la incidencia de los ocupados no asalariados (cuentapropistas).<sup>xvi</sup> No obstante el sector informal urbano comenzaba a desarrollarse durante este período, su incidencia sobre el conjunto de los cuentapropistas no parecería estar relacionada con un aumento de la heterogeneidad de esta población en términos de ingresos. Por el contrario, los



cuentapropistas habrían conformado en estos años un grupo todavía relativamente homogéneo en términos de capacidad para fijar precios en un contexto de alta inflación.<sup>xvii</sup>

## **Ciclo de desigualdad 1982-1989**

### ***Opciones de política y desempeño económico durante la transición democrática***

Hacia 1982, diversos factores agravaron la crisis económica por la que transitaba la Argentina desde los primeros meses del año anterior. Un fuerte aumento de las tasas de interés internacionales hizo de los compromisos de deuda asumidos por los países latinoamericanos una pesada carga. A esta situación financiera particular se le sumó el escenario de profundo deterioro de los términos de intercambio inducido por la segunda crisis internacional del petróleo.<sup>xviii</sup> La situación externa de la economía local se hizo insostenible cuando la guerra de Malvinas y, especialmente, el default mexicano clausuraron la posibilidad de contar con nuevos préstamos en el exterior, llevando al país a una moratoria *de hecho* con sus acreedores externos.<sup>xix</sup> Atento a la coyuntura crítica y en el contexto de inminente transición democrática, las iniciativas del gobierno militar estuvieron orientadas, de un lado, a compensar el sobreendeudamiento privado profundizando los mecanismos de estatización de deuda y, del otro, a aplacar el descontento que comenzaba a generalizarse al interior de la sociedad civil, dando inicio a una política salarial de corte expansivo.<sup>xx</sup>

Las primeras opciones en materia económica del gobierno de la transición democrática buscaron reflotar la tradición populista de la UCR, partido que había salido victorioso de la contienda electoral. Una política de ingresos que apuntaba a la recomposición del salario real –profundizando las iniciativas que en esta materia se habían impulsado durante los últimos meses del PRN– se combinó con otros

instrumentos orientados a estimular la demanda interna –crédito barato y gasto público. Sin atacar los principales problemas estructurales heredados del período militar –crisis fiscal, endeudamiento externo– y con pocas posibilidades de controlar el régimen de alta inflación –el índice de precios al consumidor registró un incremento de 688% durante 1984–, la alternativa distribucionista encarada por el ministro Grinspun encontró sus límites a los pocos meses de su puesta en vigencia.

Tras la firma de un acuerdo con el FMI hacia fines de 1984 y luego de la caída de Grinspun –impulsada en buena medida por la presión de los acreedores externos–, la prioridad será asignada, en adelante, al control de la dinámica inflacionaria. Las diversas herramientas de política económica instrumentadas por el nuevo equipo que ocuparía desde febrero de 1985 la cartera de Hacienda se adecuaban a cierto diagnóstico que enfatizaba el carácter inercial de la inflación: si en el largo plazo el incremento generalizado de los precios era el resultado del desbalanceo de las cuentas fiscales y de la consecuente emisión monetaria, en el corto plazo eran las expectativas de inflación las determinantes de la reproducción de la dinámica inflacionaria.<sup>xxi</sup> Neutralizar estas expectativas suponía diseñar una política de *shock*, que generaría por sí sola, en el corto plazo, la estabilidad necesaria para luego combatir los factores estructurales, en el mediano y largo plazo. Con estos objetivos, el Plan Austral combinaba, por un lado, políticas de ingresos dirigidas a regular los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas públicas y precios industriales) y, por el otro, un conjunto de medidas fiscales y monetarias de corte ortodoxo (control de la emisión monetaria y reforma tributaria).<sup>xxii</sup> El sesgo fiscalista de la política económica, alentado por las presiones de los organismos financieros internacionales, sería la norma de los programas de estabilización de los próximos gobiernos.

Por un momento la evolución de los precios internos y el nivel de actividad parecieron responder a las expectativas del equipo económico. La inflación disminuyó sustancialmente luego de la entrada en vigencia del plan: de los niveles previos, cercanos al 30% mensual, se redujo, hasta mediados de 1986, a valores inferiores al 4%. El crecimiento económico, que comenzaba advertirse desde mediados de 1985, se consolidó durante 1986, cuando se registró un incremento del PBI del orden del 7%. Sin embargo, la apreciación cambiaria efecto de la inflación residual y la caída de los términos del intercambio comprometieron la inserción internacional y complicaron las cuentas públicas hacia mediados de 1986. Con el propósito de evitar un desajuste en los precios relativos que comprometiera aún más las cuentas externas, y ante las presiones sectoriales de las que era objeto, el gobierno flexibilizó los controles originales del plan. En estas circunstancias se experimentó una reactivación de los aletargados mecanismos indexatorios que indujo a un rebrote inflacionario que se intensificaría progresivamente.

Los denodados esfuerzos del gobierno por controlar las principales variables macroeconómicas dieron a luz a las primeras iniciativas de reforma estructural en un contexto democrático. No obstante tales iniciativas, la imposibilidad de controlar las cuentas externas llevó, hacia 1988, a una nueva cesación de pagos. Hacia 1989, el deterioro generalizado de las expectativas de los principales agentes económicos desencadenará una corrida contra la moneda local, en el marco de la cual el gobierno resolvería dejar de intervenir en el mercado cambiario. La fuerte depreciación resultante no tardó en trasladarse a los precios internos y esta situación devino, hacia el segundo trimestre de ese año, en un proceso hiperinflacionario sin precedentes: el incremento generalizado del índice de precios al consumidor ascendería ese año a 4923%.<sup>xxiii</sup>

### ***Del estancamiento al deterioro distributivo durante los '80***

Con posterioridad al salto experimentado por la desigualdad hacia 1981, las distribuciones del IPCF y de los ingresos personales registran una recuperación notable. Hacia 1982, la atenuación de la crisis distributiva se reflejaría en una mejora del 10% en la concentración del IPCF, mucho mayor a la observada en la población de ingresos personales de mayor nivel de agregación (activos e inactivos con ingreso). Esta diferente evolución encuentra su origen en una fuerte reducción en la dispersión de las tasas de desocupación de los deciles de IPCF (Gráfico 2). En este sentido, mientras que en la crisis de 1981 se observaba un deterioro en la dispersión de las tasas de desocupación que perjudicaba a los deciles de menores ingresos, hacia 1982 la evolución de estas tasas mejora la situación relativa de los sectores peor posicionados que, parcialmente, recuperan parte de lo perdido: si bien en la tasa de desocupación para el total de la población se observa un incremento del 284% (elevado incremento relacionado con los bajos niveles del período), entre los cinco deciles de mayores ingresos el aumento en la tasa es del orden del 411%, mientras que en los de menor IPCF el incremento es sustancialmente menor (127%).

La mejoría en la desigualdad de los ingresos personales es el resultado de una notable recuperación de la dispersión de los ingresos de los asalariados, que es sin embargo atenuada por el efecto de cada una de las poblaciones más agregadas. Mientras que el CG para los asalariados cae un 15%, para el resto de las poblaciones sólo lo hace entre un 4% y un 8% (Gráfico 1). La mejora en la concentración de los ingresos personales de los asalariados parecería indicarnos —a falta de otros datos— cierto efecto igualador operado por la política salarial expansiva con la que el gobierno militar buscaba atenuar la exacerbación del descontento social post Malvinas. Un dato que aportaría a esta hipótesis es, precisamente, la menor recuperación en la dispersión de los ocupados: la incidencia de los no

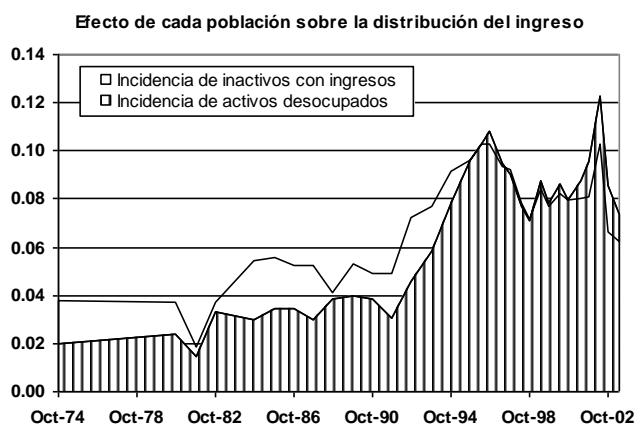
asalariados en la desigualdad (Gráfico 4) al interior de los ocupados se incrementa en 0,020 puntos del CG.

Desde esta temprana recuperación, salvo modificaciones circunstanciales, y hasta el año 1985, la concentración del IPCF y, en general, todas las distribuciones de ingresos personales consideradas se mantienen relativamente estables. No obstante hacia 1984 se experimenta una disminución en la concentración de ingresos personales de los ocupados, ni la política expansiva de los primeros años del gobierno de transición ni los incrementos salariales que precedieron al Plan Austral parecen haber tenido mayores efectos sobre la desigualdad.

El año 1985 marca el inicio de un deterioro distributivo constante que se prolongará hasta la crisis de 1989. Entre 1985 y 1988 la concentración del IPCF se incrementa en un 10%. Esta evolución es el resultado, principalmente, del deterioro en la dispersión de los ingresos de los asalariados y, en segundo lugar, del mayor efecto de la población de desocupados sobre el CG (ver Gráficos 3 y 5). En el contexto inflacionario generado a partir de la flexibilización de los controles originales del Plan Austral y en el marco del renovado vigor que adquirieron los mecanismos indexatorios, la caída del salario real volvió a ser la norma en estos años. Sin embargo, mientras que entre 1974 y 1980 la capacidad de negociación individual – ante la clausura de las convenciones colectivas– parecía haber contribuido a un proceso de estratificación salarial que favorecía a los asalariados con mayores calificaciones, la mayor desigualdad de los ingresos de los asalariados en la segunda mitad de los '80 responde a otras causas. Como se observa en el gráfico A del Anexo estadístico, la caída de las remuneraciones horarias reales en esta etapa afectó por igual a todos los asalariados independientemente de su nivel educativo. El incremento de la concentración de los ingresos de esta población puede haber

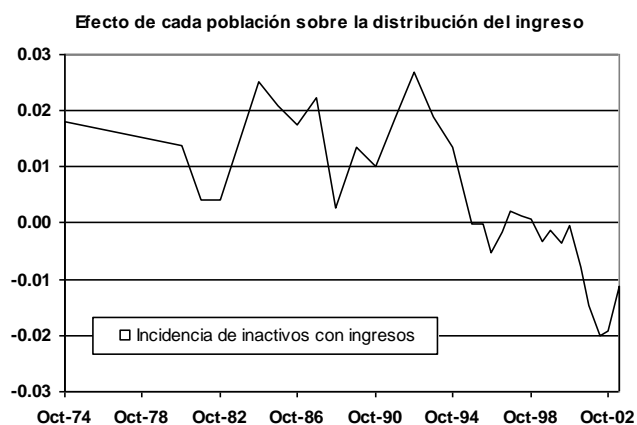
estado asociado a las distintas capacidades de negociación de gremios y sindicatos para recomponer sus remuneraciones.

**Gráfico 5**



Fuente: CG del Gráfico 1.

**Gráfico 6**



Fuente: CG del Gráfico 1.

Por su parte, el efecto de los desocupados sobre el deterioro de la dispersión de los activos parece haberse incrementado leve pero constantemente a lo largo de la década. Si bien el impacto de esta población no logra, por estos años, explicar más de un 0,040 del CG, tal incidencia duplica la registrada durante el período 1974-1980 (ver Gráfico 5). En este sentido, no obstante las circunstanciales variaciones que se observan durante los primeros años de la década, el problema del desempleo no sólo afectó fundamentalmente a los deciles de menores ingresos (como surge del Gráfico 2, las tasas de dispersión de la desocupación fueron durante los '80 sensiblemente superiores a las registradas en la década anterior), sino que también, en el marco del estancamiento económico que signó al período, la tasa de desocupación prácticamente se triplicó entre 1981 y 1988 (ver Tabla B del Anexo estadístico).

La hiperinflación de 1989 marca el fin del segundo ciclo de desigualdad. El nivel de concentración del IPCF superó, por primera vez –por lo menos desde que se tienen registros–, el 50% del valor del CG (ver Gráfico 1). A diferencia de la crisis de

1981, en la que observábamos un efecto de arrastre de la desigualdad, desatado por el incremento de la concentración de los ingresos de los asalariados, la particularidad de la crisis hiperinflacionaria fue la contribución de tres de las poblaciones de ingresos personales en el deterioro de la distribución del IPCF: el efecto conjunto de los asalariados, los no asalariados y los inactivos con ingresos contribuye a explicar el valor que asumió el indicador en ese año (Gráficos 3, 4 y 6).

No obstante los efectos sumados de estas tres poblaciones dan cuenta de la mayor desigualdad de la distribución de los ingresos, la incidencia de los inactivos es bastante limitada. Es el deterioro de la dispersión de los ocupados (asalariados y no asalariados), del orden del 11% del valor del CG, el que principalmente explica el pico de desigualdad. Ahora bien, dentro de los ocupados, y en clara oposición a lo observado en la crisis de 1981, los no asalariados no logran atenuar el deterioro distributivo de los asalariados. Algunos autores sostienen que el comportamiento diferencial de esta población sobre la desigualdad estaría asociado a un cambio en su composición: en un período en el que la demanda de empleo formal era particularmente débil (la tasa de desocupación se había triplicado a lo largo de la década), el sector informal urbano habría incrementado su participación al interior del cuentapropismo. Esta evolución habría contribuido a volver más heterogénea la estructura de ingresos de los no asalariados y, por tanto, a alterar su otrora homogénea capacidad de fijar precios en un contexto de alta inflación.<sup>xxiv</sup>

## **Ciclo de desigualdad 1990-1995**

### ***Opciones de política y desempeño económico durante los primeros '90***

Dadas las características del dilema a resolver –cesación de pagos e hiperinflación–, el análisis sobre las causas de la crisis argentina que hacían los futuros técnicos de la administración justicialista, hacia fines de los '80, no era

diferente del que impartía, en esa misma época, el –así conocido– Consenso de Washington.<sup>xxv</sup> El nuevo gobierno (1989-1999) intentaría revertir la coyuntura crítica partiendo de un diagnóstico neoliberal que veía en el excesivo crecimiento del Estado y en el populismo económico una pesada carga perturbadora del normal despliegue de los agentes privados.<sup>xxvi</sup> Las opciones de política necesarias para revertir la crisis que se desprendían de este enfoque, en clara sintonía con los intereses de los acreedores externos y el capital concentrado local, hacían de los instrumentos de reforma estructural una prioridad impostergable. Reforma del Estado –privatizaciones, control del gasto, descentralización de funciones–, desregulación de la economía y apertura al comercio y a los capitales extranjeros conformarían los lineamientos básicos de la opción neoliberal menemista.

A pesar de que los primeros intentos por estabilizar los precios resultaron frustrados, desencadenándose un segundo proceso hiperinflacionario hacia marzo de 1990, los principales ejes de reforma estructural cobraron relevancia desde los inicios de la nueva gestión: la Ley de Reforma del Estado, que sentó las bases normativas para la transferencia de activos públicos al sector privado; la Ley de Emergencia Económica, que suspendía los regímenes de promoción industrial y de exportaciones y las normas que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras estatales, y los anuncios en materia de apertura comercial y financiera datan, todos ellos, de 1989.<sup>xxvii</sup>

No obstante la virulencia del proceso de reforma estructural, la estabilización macroeconómica sólo se logrará hacia 1991, de la mano de un plan basado en la fijación del tipo de cambio como ancla del sistema de precios. Ante las dificultades de los planes precedentes la Ley 23.928 establecía, entre otros puntos, la libre convertibilidad de la moneda local frente al dólar estadounidense, la obligación del BCRA de restringir la emisión monetaria a la disponibilidad de reservas



internacionales y la derogación de todas las disposiciones legales o reglamentarias que autorizaran la indexación por precios.<sup>xxviii</sup> La emisión monetaria quedaría de aquí en más atada al resultado de la balanza de pagos, cerrando toda posibilidad de financiar por este medio eventuales desequilibrios presupuestarios y limitando la actuación del BCRA como prestamista de última instancia del sistema financiero.

La desregulación de la economía se intensificó hacia 1991, abarcando un amplio espectro de decisiones gubernamentales. De un lado, el decreto 2284, significó el repliegue de la intervención estatal en diversos sectores de la economía: transporte, productos alimenticios y farmacéuticos, servicios profesionales y, acompañando la apertura, actividades portuarias y comerciales.<sup>xxix</sup> Mediante este decreto, se procedió a la disolución de una serie de entramados institucionales que devendrían obsoletos en el nuevo modelo de crecimiento.<sup>xxx</sup> Por su parte, la desregulación del mercado de trabajo, cristalizada en la Ley de Empleo de 1991 y en las reformas a la Ley de Contrato de Trabajo –hacia 1995–, generó las condiciones de posibilidad de nuevas modalidades de contratación flexibles, que permitieron a las empresas ajustar su demanda de trabajo a los avatares de la evolución del nivel de actividad interna.

En el corto plazo, la estabilización lograda gracias a la implementación del tipo de cambio nominal fijo y la instrumentación de las distintas reformas estructurales tuvieron un efecto positivo en lo relativo a la credibilidad, por parte de la comunidad internacional, respecto del cambio en las reglas de juego locales. Esta mayor credibilidad, que permitió el acceso a mecanismos de refinanciación de la deuda – Plan Brady–, se vio acompañada por un cambio en la coyuntura internacional signado por la baja en las tasas de interés y una alta liquidez. El resultado de estas tendencias fue la significativa reversión de los flujos de capital que durante los '80 había implicado para la economía argentina una transferencia neta de recursos hacia el exterior.

También en el corto plazo, la estabilización de los precios internos que siguió a los procesos hiperinflacionarios de 1989 y 1990 contribuyó a recomponer el poder de compra de los salarios. Esta recuperación, junto con la expansión del crédito interno y externo favorecida por el cambio en la coyuntura internacional, reactivó la demanda y el nivel de actividad, experimentándose desde 1991 hasta 1994 un intenso crecimiento del PBI, superior al 7% anual promedio.

No obstante la elocuencia de los niveles de crecimiento, la progresiva apreciación del tipo de cambio, sumada a la apertura comercial, configuró una estructura de precios y rentabilidades relativas que favorecía a los bienes y servicios no transables y perjudicaba a los transables. En estas condiciones, el sector industrial perdió participación en el conjunto de la actividad económica, profundizándose así el proceso de desindustrialización que se remonta a la desarticulación de la ISI. Asimismo, el sector fue objeto de una profunda reestructuración caracterizada, entre otros aspectos, por crecientes heterogeneidades en el desempeño empresarial y por una transformación en el perfil tecno-productivo de las firmas.<sup>xxx</sup>

Mientras que muchas empresas industriales no lograron resistir a la competencia internacional, las que pervivieron lo hicieron en el marco de un fuerte proceso de reestructuración, para reducir el mayor costo laboral en dólares y aumentar la productividad, mediante la inversión en maquinaria y, fundamentalmente, en tecnologías blandas ahorradoras de mano de obra.<sup>xxx</sup> Asimismo, se observa, durante esos años, un cambio en el perfil industrial asociado al incremento de la participación intrasectorial de ramas generadoras de escaso valor agregado, lo que condujo a la pérdida de dinamismo del sector.<sup>xxx</sup> La caída del valor agregado industrial encuentra su explicación también en un proceso de fuerte desintegración de la producción fabril: la apertura dispuesta por la administración justicialista tendió a incentivar la subcontratación de partes o procesos principalmente vía

importaciones.<sup>xxxiv</sup> Así, el sector industrial se convirtió en los '90 en un continuo expulsor de mano de obra, incluso en los momentos de crecimiento económico. Durante los primeros años de vigencia de la convertibilidad, el incremento de los índices de desempleo (ver Tabla C del Anexo estadístico) da cuenta de cierta contradicción entre crecimiento y absorción de mano de obra, característica del cambio en la estructura productiva doméstica.

En este contexto, la reversión de los capitales internacionales hacia fines de 1994, alimentada por el incremento en las tasas de interés internacionales y por la posterior crisis mexicana, haría manifiesta la profundización de la dependencia del modelo de la disponibilidad de fondos externos. Ante el déficit comercial intensificado durante los años de crecimiento y las restricciones en materia de política monetaria que imponía la Ley de Convertibilidad, la expansión doméstica sólo era viable en contextos internacionales favorables. El deterioro del escenario internacional desencadenó una reversión del ciclo económico –caída del 3% del PBI–, cuyo principal efecto socioeconómico fue la explosión de la tasa de desocupación, que alcanzó niveles sin precedentes en la historia argentina: para el conjunto de los aglomerados urbanos ascendió a 18,4% hacia mayo de 1995 (Tabla C del Anexo estadístico).

### ***Desempleo y deterioro distributivo durante los primeros '90***

En el marco de la culminación de los dos procesos hiperinflacionarios, el deterioro en la desigualdad del IPCF experimentado hacia 1989 se revirtió considerablemente hacia octubre de 1990. El CG para la media de los ingresos de los hogares se recuperó un 11%, arrastrado por la recomposición de la dispersión de los ingresos personales: todas las subpoblaciones de ingresos individuales registraron en ese año una mejora de entre el 13% y el 14% con relación al año anterior (ver Gráfico 1).

La mínima diferencia entre la evolución de la concentración del IPCF y la de los ingresos individuales de la población de mayor nivel de agregación (activos e inactivos con ingresos) encuentra su origen en el leve incremento de la dispersión de las tasas de actividad y desocupación que se observa entre esos años (ver Gráfico 2).

La mejora en el reparto del IPCF continuará hasta 1992, estableciéndose entonces un piso distributivo del ciclo del orden del 0,45 del CG, similar a los niveles registrados el año anterior a la crisis de 1989. Sin embargo, la mejora distributiva durante ese año, del 3% del indicador, no encuentra su explicación en un comportamiento homogéneo en la dispersión de los ingresos personales similar al del año 1990, sino en cierta tendencia –que se mantendrá hasta 1995– hacia la caída de la dispersión interdecílica de las tasas de actividad y desocupación (ver Gráfico 2), que contrarresta el leve incremento de la desigualdad de la población más agregada de ingresos individuales. Del lado de las tasas de actividad de los distintos deciles de IPCF se observa por esos años un moderado y casi constante incremento en los grupos peor posicionados y una leve caída en los más acomodados (Tabla A del Anexo estadístico). En lo que a la desocupación se refiere, no obstante la falta de empleo afecta fundamentalmente a los grupos de menores ingresos, los deciles de mayor IPCF comienzan a verse más perjudicados por la falta de trabajo –en términos relativos– durante esos años (ver Tabla B del Anexo estadístico).

Como hemos señalado en el apartado anterior, durante los primeros años de estabilidad de los '90 se registró una particular combinación entre desempleo y crecimiento, resultante del efecto conjunto sobre la estructura productiva local operado por los instrumentos de reforma estructural y ajuste macroeconómico que caracterizaron a la opción neoliberal menemista. En este contexto, la incidencia de

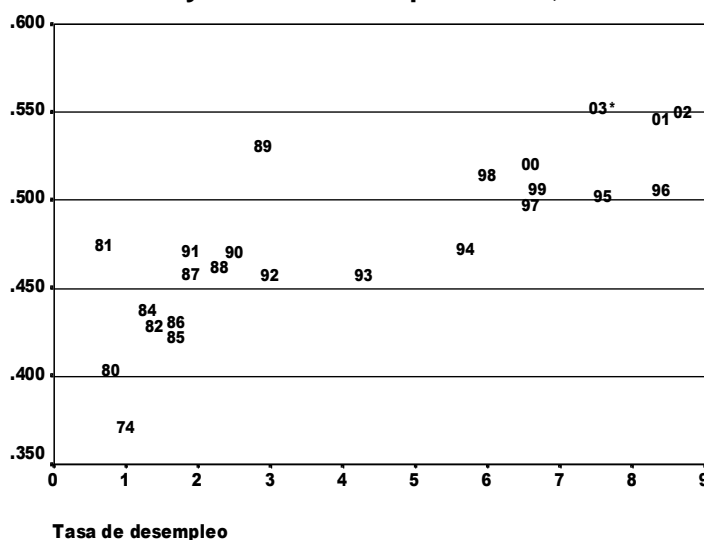
los desocupados sobre la dispersión de los ingresos individuales experimentó un salto notable incluso durante la primera fase expansiva (ver Gráfico 5). Si durante 1992 este importante cambio no encuentra un paralelo en la distribución de los ingresos individuales esto se debe a la también importante mejoría en la igualdad de los ingresos de los ocupados asalariados (ver Gráfico 3).

El escenario distributivo que, en lo que al IPCF se refiere, parecía mantenerse estabilizado hasta el año 1993, comienza a deteriorarse a partir de 1994. El efecto negativo de los desocupados se conjugaba ahora con una mayor dispersión en la distribución de los ingresos personales de los ocupados, fundamentalmente de los asalariados (ver Gráfico 3). Este incremento de la desigualdad de los ingresos personales de los asalariados ya había contribuido –sumado a la fuerte incidencia de los desocupados– al deterioro de los ingresos personales de todas las subpoblaciones hacia 1993 (ver Gráfico 1), no obstante lo cual su efecto sobre el IPCF había sido neutralizado ese año por la caída en la dispersión decílica de los niveles de actividad y desocupación. A partir de 1994 las variaciones en estas tasas no lograrán atenuar la evolución de la desigualdad impulsada por el efecto combinado de los asalariados y los desocupados.

En lo que respecta al deterioro de la distribución del ingreso personal de los ocupados asalariados, a partir de 1994 se observa una fuerte modificación en las remuneraciones horarias para los distintos niveles de educación (ver Gráfico A del Anexo estadístico). Este proceso de estratificación salarial incipiente daría cuenta, en el contexto del primer quinquenio de los '90, del cambio en las calificaciones demandadas por los empleadores.<sup>xxxv</sup> Sin embargo, y como efecto principal de las reformas estructurales, el desempleo parece haber contribuido mayormente a la concentración de los ingresos personales: de un lado, es probable que los altos niveles de desocupación hayan afectado el poder de negociación de los asalariados

impulsando el empeoramiento de la dispersión de sus remuneraciones; del otro, desde 1992 el deterioro distributivo explicado por la población desocupada comienza a distanciarse fuertemente del promedio de la década anterior. Si en la década del '80 el efecto de los desocupados explicaba aproximadamente 0,03 puntos del coeficiente en promedio, hacia 1994, cuando las distribuciones de los asalariados y de los ocupados registraban deterioros menos significativos, la incidencia del desempleo sobre la desigualdad de los ingresos personales explicará 0,08 puntos del CG (Gráfico 5). El Gráfico 7 refleja esta novedosa tendencia que se inaugura durante los primeros años de la década: a partir de 1994 los valores que asume la distribución del IPCF comienzan a encontrarse claramente asociados a los niveles de desocupación.

**Gráfico 7**  
**Gini IPCF y tasa de desempleo. GBA, 1974-2003**



Fuente: Elaboración propia en base a EPH, GBA, onda octubre y (\*) onda mayo.  
Nota: Tasa de desempleo calculada como porcentaje de la población total.

El contexto recesivo de 1995 produce un salto en el deterioro de la dispersión del IPCF, del orden del 6,7% del CG, que cerrará el tercer ciclo de desigualdad. Este deterioro se explica por la evolución negativa de las distribuciones de todas las

poblaciones de ingresos individuales, con la excepción de la comprendida por los activos y los inactivos con ingreso, que mantiene un comportamiento poco relevante en términos de deterioro distributivo, como era posible observar en los anteriores picos de desigualdad (1981 y 1989). El efecto de los inactivos (jubilados, pensionados o rentistas) sobre la desigualdad, se encuentra asociado al carácter relativamente estable de sus ingresos, que coadyuva a neutralizar levemente el deterioro distributivo en contextos de crisis.

A la mayor concentración de los ingresos individuales contribuyen, en primer lugar, los desocupados. El efecto de esta subpoblación puede observarse al comparar el incremento en la desigualdad de los activos y el de los ocupados: mientras que para los primeros el CG se acentúa un 9,6%, para los segundos el incremento es de 7%. En segundo lugar, es también relevante para dar cuenta del aumento de la desigualdad de ingresos lo que sucede con los ocupados no asalariados, que queda expresado por la diferencia entre el deterioro de las dispersiones de los ocupados y el de los asalariados, 7% y 4,6%, respectivamente. Finalmente queda claro también el efecto operado por los asalariados sobre el acentuamiento de la concentración de los ingresos personales.

De este modo, la especificidad de la crisis de 1995 reside en la activa intervención de los desocupados en el deterioro distributivo general. A diferencia de lo ocurrido en las crisis precedentes y como síntoma de las transformaciones operadas en el mercado de trabajo por los cambios en la estructura productiva local, la subpoblación que los incluye (activos) juega, por vez primera, un rol central en la explicación de la desigualdad en momentos de crisis distributiva. No obstante, resulta igualmente significativo que el salto experimentado por la concentración del IPCF sea sensiblemente inferior al observado en las dos crisis distributivas

anteriores (del 18% hacia 1981 y del 15% en 1989). Tal novedad no es ajena al contexto de estabilidad de precios que enmarca el escenario distributivo de 1995.

## **Ciclo de desigualdad 1996-2002**

### ***Opciones de política y desempeño económico durante los segundos '90***

Como consecuencia de las privatizaciones, la desregulación, la apertura y la fijación del tipo de cambio, el Estado perdió desde principios de la década buena parte de su capacidad para intervenir en la economía: el control de las tarifas de los servicios públicos, la aplicación de políticas arancelarias o paraarancelarias, el manejo del tipo de cambio y la emisión monetaria, así como la reorientación de recursos a actividades estratégicas mediante subvenciones, dejaron de ser alternativas viables en lo que a la acción estatal se refiere. Tal encorsetamiento tuvo como corolario una virtual descomposición de capacidades estatales<sup>xxxvi</sup> que clausuró en buena medida los márgenes para la realización de políticas anticíclicas.

En este marco, la crisis experimentada hacia 1995 sólo podría revertirse de la mano del ingreso de capitales. Un importante paquete de apoyo externo permitió una relativamente rápida reversión de la fase recesiva. La operación coordinada por el FMI, que involucraba cerca de 11.000 millones de dólares, inyectó liquidez al sistema financiero y a la economía local, alentando el crecimiento de la demanda interna hacia el cuarto trimestre de ese año. De aquí en adelante, el sostenimiento de la actividad económica dependería casi exclusivamente de los ingresos de divisas aportados por el sector gubernamental –deuda pública.<sup>xxxvii</sup>

Durante este período se asistirá a cierta potenciación recíproca entre endeudamiento y crisis fiscal. Dados los límites impuestos por el plan de convertibilidad, el endeudamiento crónico del sector público resultaba necesario para mantener los niveles del crecimiento interno. Pero el incremento de los compromisos



externos contribuía al deterioro de las cuentas públicas erosionando de este modo las condiciones para el endeudamiento soberano. El gobierno, reelecto hacia 1995, optó por mantenerse dentro de esta espiral perversa y el sesgo fiscalista orientó las principales medidas de política económica implementadas.

Los altos niveles de crecimiento experimentados durante los tres años posteriores a la crisis de mediados de los '90, cercanos al 6% anual promedio, no lograron recomponer la situación del mercado de trabajo. No obstante la recuperación económica trajo consigo un aumento de la demanda laboral, durante esta etapa el desempleo nunca disminuyó por debajo de los dos dígitos, dando cuenta de la escasa capacidad de absorción de mano de obra que caracterizaba a la estructura productiva local desde principios de la década. Más aún, la baja elasticidad producto-empleo de la economía se refleja también en la evolución de la subocupación horaria, que en la segunda fase de crecimiento mantuvo una tendencia alcista, registrando valores superiores al 13%.

El cambio en la coyuntura internacional volvió a operar como detonante de una nueva reversión del ciclo económico hacia 1998. El comportamiento de los capitales financieros, que huían masivamente de las economías emergentes como respuesta ante el default de Rusia, complicó nuevamente la situación de las cuentas externas de la Argentina, inaugurando una fase recesiva que se extendería hasta mediados de 2002. La restricción de fondos externos se intensificó aún más hacia 1999 cuando la crisis de Brasil, principal socio comercial del país, culminó en una fuerte devaluación del Real.<sup>xxxviii</sup> En este contexto, al deterioro de la cuenta capitales de la balanza de pagos se sumaba un potenciado déficit comercial.

En el marco del alto nivel de vulnerabilidad externa asumió un nuevo gobierno (1999-2001) con el objetivo explícito de conservar los lineamientos básicos del modelo de los noventa. En el contexto recesivo y de retirada de capitales de la

región, las políticas fiscales contractivas predominaron durante los dos años del breve mandato de la Alianza. En los primeros cinco trimestres la prioridad puesta en la disminución de la brecha fiscal llevó al gobierno a eliminar exenciones al IVA, reducir la base no imponible del impuesto a las ganancias y recortar haberes de empleados públicos y jubilaciones. No obstante su sesgo fiscalista profundizaba la recesión al reducir el consumo privado, estas medidas posibilitaron un mayor acceso al financiamiento internacional –*blindaje*– que incrementó sustancialmente la deuda externa pública. El mayor endeudamiento, que más adelante sería acompañado por mecanismos de refinanciación de deuda pública externa e interna –*megacanje* y *canje voluntario*, respectivamente–, conformarían sendos intentos por revertir las expectativas negativas en torno al mantenimiento de la convertibilidad, que comenzaban a intensificarse cada vez más.

Pero ante la dificultad para superar la fase recesiva del ciclo que ya acumulaba más de dos años y con el objetivo de neutralizar el drenaje de divisas y compensar en alguna medida la sobrevaluación del tipo de cambio, el gobierno –de la mano de Cavallo en Economía– se embarcó hacia el segundo trimestre de 2001 en una serie de medidas que, en el marco de las restricciones impuestas por el modelo neoliberal, suponían un esbozo de proteccionismo. La instauración de un tipo de cambio diferencial para el comercio exterior –*canasta de monedas* (dólar y euro)– y la reducción de las exigencias de encajes bancarios –con el objetivo de dar liquidez al mercado interno– constituyeron un sintomático giro del icono local del neoliberalismo de los noventa. El giro no alcanzó a revertir las expectativas de corto plazo y el discurso de la urgencia económica volvió a justificar la implementación de políticas fiscales contractivas más duras.

El *déficit cero*, que subordinaba las remuneraciones del sector público a los niveles de recaudación, tampoco pudo fortalecer la limitada confianza de los agentes

económicos y el gobierno se vio obligado en el último trimestre de 2001, previa bancarización forzada de las transacciones económicas, a restringir el libre retiro de depósitos, en principio por noventa días, para evitar el colapso del sistema financiero y de la convertibilidad monetaria. La velocidad de los acontecimientos marcó los últimos días del gobierno de De la Rúa, quien, en un marco de exacerbación del descontento social, se vio obligado a renunciar hacia diciembre de ese año.

Tras la vertiginosa serie de recambios presidenciales que siguió a la renuncia del gobierno electo en 1999, durante uno de los cuales se abriría la puerta al default soberano, el gobierno de Duhalde (2002-2003) impulsó una serie de políticas, centradas en la liberación –devaluación– del tipo de cambio, la pesificación asimétrica de deudas y depósitos bancarios y la imposición de retenciones a las exportaciones tradicionales, con el objetivo manifiesto de incrementar la competitividad de la producción local y solucionar la crisis del sistema financiero y de la economía en general.<sup>xxxix</sup> Sin embargo, tales políticas no tuvieron, en el corto plazo, el efecto deseado. Muy por el contrario, la devaluación se tradujo –como otrora– en un incremento generalizado de los precios que, al impactar negativamente sobre el poder de compra de los salarios –entre 2001 y 2002 el salario real industrial caería un 18,9%–,<sup>xl</sup> redujo el consumo interno prolongando así el derrumbe de la actividad económica en los primeros meses de 2002.

La modificación en los precios relativos que operó la devaluación implicó una transferencia de ingresos que favoreció a los sectores productores de bienes transables, que cuentan con ventajas comparativas naturales. No obstante las retenciones a las exportaciones –con topes máximos del orden del 20%– tendrían por objeto acotar esa transferencia, si consideramos que la modificación de la pauta cambiaria terminó incrementando el valor de la divisa un 200% esta limitación resulta poco significativa. Finalmente, la devaluación mejoró las cuentas externas,

incrementando el superávit de la balanza comercial. Sin embargo, tal mejoría no encuentra sus fundamentos en algún incentivo a las exportaciones no tradicionales, sino en una pronunciada reducción de las importaciones. En este sentido, el efecto-ingreso de la devaluación es el que siguió rigiendo.<sup>xii</sup>

El balance de la prolongada recesión incluye una caída del PBI del 5% anual promedio, para los años 1999-2002. Asimismo, el desempleo y la subocupación horaria mostraron durante los cuatro años una tendencia creciente hasta alcanzar, en mayo de 2002, picos de 21,5% y 18,6%, respectivamente, en el conjunto de los aglomerados urbanos relevados por la EPH (Tabla C del Anexo estadístico). A este desalentador panorama se sumará, por efecto de la devaluación, el mencionado incremento generalizado en los precios, del orden del 5% mensual promedio durante los primeros meses de 2002, que alcanzaría un 30% en total en el primer semestre de ese año. Asociada a las fluctuaciones del índice de precios al consumidor, la pobreza de ingresos –según las mediciones del INDEC– se incrementó en forma alarmante pasando del 35,4% al 49,7% de la población del GBA, entre octubre de 2001 y mayo de 2002. Finalmente, los niveles de indigencia prácticamente se duplicaron en el mismo período –pasando de un 12,2% a un 22,7% para el aglomerado GBA. Tales niveles de pobreza e indigencia acentuaron el carácter dual de la sociedad argentina haciendo que tal expresión comience a ser tomada en su crudo sentido literal.

### ***Desempleo y desigualdad salarial en la consolidación de una sociedad dual***

A diferencia de lo ocurrido tras la finalización de la crisis distributiva anterior, con posterioridad a la de 1995 no se experimenta una mejoría significativa en la dispersión del IPCF (ver Gráfico 1). Tal distribución se mantendrá, hasta 1997, en los niveles alcanzados durante el pico de 1995, en torno a 0,48 puntos del CG. La

particularidad de la coyuntura de esos años explica el diferencial comportamiento de la dispersión del IPCF. Mientras que en 1989 un proceso hiperinflacionario acompañaba el deterioro distributivo, hacia 1995 la estabilidad de precios era la norma. De este modo, la relativa estabilización de los precios posterior al pico inflacionario, que operó en el pasado como una suerte de mecanismo igualador de la distribución del IPCF, estará ausente en los años posteriores a la crisis de 1995. Esto se hace evidente si consideramos también la dispersión de los ingresos individuales de las distintas poblaciones que, durante esos años (hasta mayo de 1997), no registra mejoras sustanciales (Gráfico 1).

Sin embargo, hacia octubre de 1997 se observa una importante caída en la concentración de los ingresos individuales que no se refleja en la evolución de la desigualdad de IPCF. Tal caída, vinculada fundamentalmente a la mejora de las distribuciones de activos y ocupados, no incide en la concentración de IPCF debido a que no se modifica la dispersión interdecílica en las tasas de actividad y desocupación (ver Gráfico 2). En otras palabras, si la caída de la desocupación experimentada hacia octubre de 1997 –de casi 6 puntos con relación al mismo período del año anterior (ver Tabla B del Anexo estadístico)– explica, en buena medida, la menor concentración de ingresos individuales (Gráfico 5), el hecho de que tal caída se haya producido en forma homogénea para todos los deciles de ingresos da cuenta de su escasa incidencia sobre la concentración de IPCF.

A partir de 1998 la distribución del IPCF comienza a deteriorarse en forma continua.<sup>xlii</sup> Entre mayo de 1998 y octubre de 2000 el leve incremento de la concentración del IPCF está asociado, dado la estable dispersión en las tasas de actividad y desocupación, al aumento de la concentración de ingresos que se registra entre los asalariados, del orden del 4,5% del CG. El deterioro en la dispersión de los ingresos totales de los asalariados es, sin embargo, levemente

atenuado por una relativa mejoría de la incidencia de los ocupados no asalariados (Gráfico 4). Por su parte, no obstante eventuales variaciones, la incidencia de los desocupados y los inactivos sobre la dispersión de los ingresos individuales se mantiene estanca.

Ahora bien, son diversos factores los que podrían contribuir a explicar la mayor concentración de ingresos totales de los asalariados. En primer lugar, tal evolución puede ser el resultado de una modificación en la dispersión de los ingresos por fuentes laborales o, por el contrario, de un cambio en la concentración de las fuentes no laborales. En segundo lugar, si la mayor desigualdad se encuentra asociada a la evolución de las fuentes laborales, debe controlarse el efecto que sobre este tipo de fuentes tiene la cantidad de ocupaciones de los asalariados. Como tercer nivel de explicación, si la mayor desigualdad reside en la dispersión de los ingresos de la ocupación principal, es necesario evaluar cómo afectan a la evolución del valor del indicador las ocupaciones principales a tiempo parcial (subocupaciones) o a tiempo completo. Finalmente, si son las ocupaciones a tiempo completo las que explican la desigualdad, existen dos posibilidades: o bien la cantidad de horas trabajadas se encuentra desigualmente distribuida, o bien son las remuneraciones horarias el origen de la concentración de ingresos.<sup>xliii</sup>

Para este período contamos con datos que nos permiten buscar el origen del incremento de la desigualdad de los asalariados. Los gráficos 9 y 10 presentan la evolución de los indicadores para el método de descomposición arriba sintetizado. De ellos se desprende que, en la medida en que todas las distribuciones conservan tendencias similares, es aquella más específica, la concerniente a la dispersión de las remuneraciones horarias de la ocupación principal a tiempo completo, la que explica el incremento en la desigualdad de los asalariados entre 1998 y 2000. A su vez, al igual que durante los últimos años del primer quinquenio de los '90, la mayor

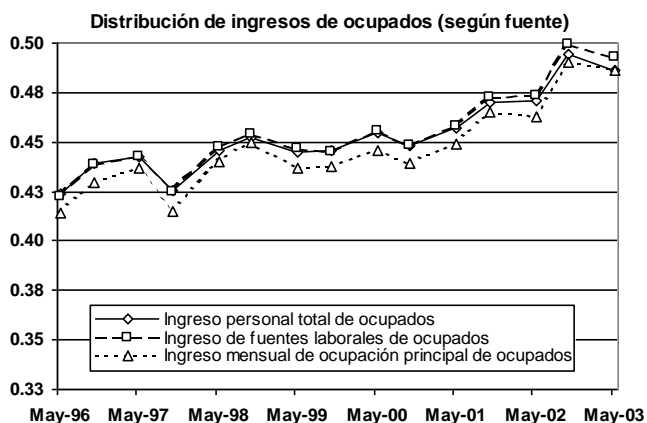
concentración de las remuneraciones horarias estaría vinculada estrechamente con las calificaciones de los asalariados. En este sentido, la media de los ingresos horarios de los asalariados con mayor nivel educativo (universitario completo e incompleto) continuó distanciándose de la de aquellos con menores calificaciones (ver Gráfico A del Anexo estadístico). La recesión iniciada a mediados de 1998 parece haber contribuido, pues, a intensificar el proceso de devaluación educativa<sup>xliv</sup> operado a partir de la demanda de mayores calificaciones en el mercado laboral, en un contexto de alta desocupación. Sin embargo, no debe subestimarse, al analizar la evolución de la desigualdad de los asalariados durante este período, el efecto del ajuste estatal sobre las remuneraciones horarias de los empleados públicos, que vieron reducidos sus ingresos en un 13% durante 2000.

Desde octubre de 2000 la dispersión del IPCF se deteriorará considerablemente hasta alcanzar niveles sin precedentes en mayo de 2002 (0,55 del CG), momento en el que finaliza el cuarto ciclo de desigualdad considerado (Gráfico 1). Hasta octubre de 2001, ese incremento de la concentración del IPCF estuvo impulsado principalmente por el fuerte deterioro de la distribución de los ingresos totales de los asalariados y, en segundo lugar, por el efecto de los desocupados sobre los niveles del indicador. Mientras que la desigualdad de los asalariados se incrementa un 5% con relación a igual período del año anterior, la de los activos aumenta en un 7%, dando cuenta de la negativa incidencia de los desocupados. Por su parte, si en ese año los ocupados no asalariados tienen un efecto nulo sobre los valores alcanzados por el CG (Gráfico 4), los inactivos con ingresos mejoran la desigualdad en términos absolutos (Gráfico 6).

La mayor concentración del ingreso de los asalariados encuentra su origen tanto en el deterioro de la dispersión de las remuneraciones horarias –continuando la tendencia observada en años anteriores– como, a partir de octubre de 2001, en un

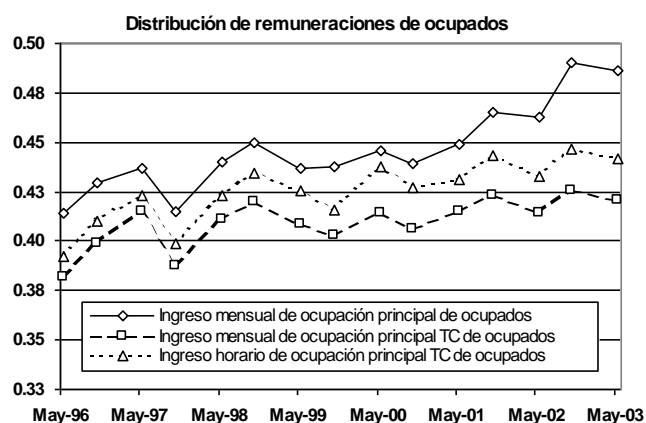
sensible aumento de la incidencia de las ocupaciones a tiempo parcial (ver Gráfico 10). En este sentido, la persistencia de la fase recesiva del ciclo no sólo incrementó la desocupación sino también otro de los síntomas de la escasa absorción de mano de obra de la economía, la subocupación horaria (ver Tabla C del Anexo estadístico). La diferente evolución de la desigualdad de ingresos de ocupación principal y de ocupación principal a tiempo completo de los asalariados (Gráfico 10), estaría indicando que tal incremento de la subocupación no se distribuyó homogéneamente en esta población.

**Gráfico 7**



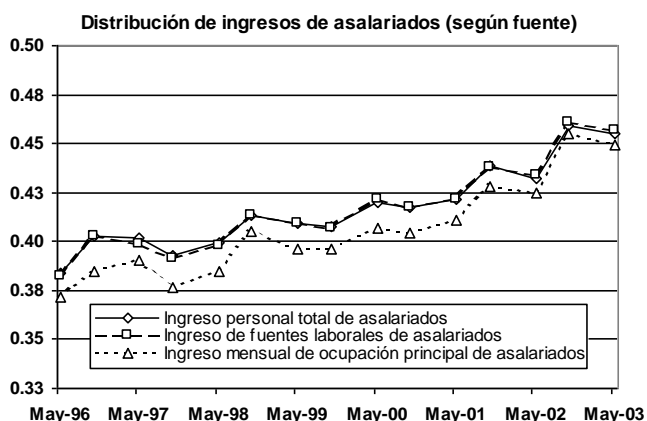
Fuente: EPH, GBA, 1996-2003.

**Gráfico 8**



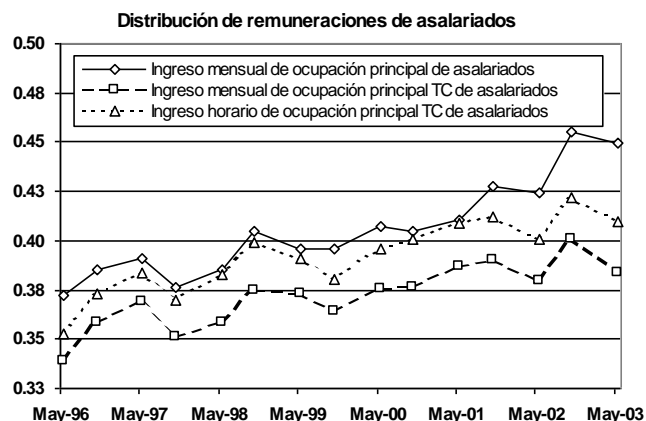
Fuente: EPH, GBA, 1996-2003.

**Gráfico 9**



Fuente: EPH, GBA, 1996-2003.

**Gráfico 10**



Fuente: EPH, GBA, 1996-2003.



El salto de la desigualdad de IPCF registrado hacia mayo de 2002 similar, en la comparación interanual, al observado en octubre de 1995, no es independiente de la exacerbación de la crisis económica que desencadenó la salida formal de la convertibilidad. Como vimos, en el corto plazo la inflación desatada tras la devaluación se tradujo en una profundización del negativo desempeño económico conformando un nuevo escenario en el cual los principales indicadores sociales alcanzarían niveles alarmantes. Con los datos con que contamos podemos precisar aún más la evolución de la concentración de los ingresos. Entre octubre de 2001 y mayo de 2002 el CG para la distribución del ingreso per cápita de los hogares se incrementa en más de un 4%. Tal deterioro distributivo encuentra su origen en la mayor desigualdad registrada en la población de los activos (Gráfico 1). En el breve lapso analizado, los ocupados (asalariados y no asalariados) parecen no haber tenido efecto alguno sobre el pico de desigualdad observado luego de la devaluación. Por su parte, el comportamiento de los inactivos con ingreso no sólo opera neutralizando la mayor concentración de los ingresos individuales, como en las crisis distributivas anteriores, sino que incluso contribuye a mejorar el reparto en términos absolutos (Gráfico 6). De este modo es, fundamentalmente, el efecto de los desocupados el que gobierna la mayor desigualdad de ingresos, expresando la especificidad de una crisis distributiva precedida por una prolongada recesión económica (ver Gráfico 5).

### **El escenario distributivo abierto en 2002**

Aunque en el corto plazo la devaluación profundizó la recesión, en el mediano plazo el incentivo para la sustitución de importaciones daría nuevos impulsos a la producción industrial doméstica y la economía volvería a crecer. Durante 2003 la reactivación económica, registrada desde mediados del año anterior pero sin efecto

en la comparación interanual 2001-2002, se reflejó en un crecimiento del PBI de casi 9%. Sin embargo, dada la aguda crisis del sistema financiero, el crédito restringido y a tasas prohibitivas limitó la reorientación de capitales a la producción de bienes. El efecto sustitución operado por la devaluación se explicaría fundamentalmente –por lo menos durante este período– por la utilización de capacidad ociosa instalada en un contexto de bajos costos laborales.

La devaluación también ha posibilitado desde su implementación una notoria mejoría en las cuentas públicas. De un lado, las retenciones a las exportaciones significaron un nuevo instrumento de recaudación que ha permitido incrementar sustancialmente los ingresos fiscales, incluso en el contexto recesivo de los primeros meses de 2002. Asimismo, dado el esquema tributario local, basado en un fuerte componente de impuestos al consumo –IVA–, la inflación desatada contribuyó también a sanear las cuentas públicas, sobre todo desde el comienzo de la reactivación de la demanda interna. Finalmente, la relativa inflexibilidad del gasto estatal ha acompañado la bonanza fiscal: las erogaciones relativas a las nuevas iniciativas en materia de política social –que serán desarrolladas más adelante– y la restitución del 13% a empleados públicos y jubilados, hacia principios de 2003, no lograron revertir el superávit fiscal generado por el incremento de los recursos. Sin embargo, esta mejoría tiene como contraparte un profundo deterioro de la capacidad para afrontar los compromisos de la deuda en moneda extranjera, así como un incremento del endeudamiento interno, pues el Estado se hizo cargo de los costos de la pesificación asimétrica.

Pero el nuevo escenario expansivo no ha neutralizado aún el mal desempeño de los principales indicadores socioeconómicos. En primer lugar, el deterioro del poder de compra de los salarios no pudo ser mejorado a pesar de los aumentos no remunerativos dispuestos por el gobierno desde mediados de 2002. La escasa

incidencia de tales aumentos se encuentra directamente relacionada a sus bajos montos –de 100\$, primero, y 50\$, posteriormente– y a los altos niveles de informalidad que caracterizan al mercado de trabajo urbano argentino. Así, entre el primer semestre de 2002 y el mismo período de 2003 el salario real del sector manufacturero siguió erosionándose en un 1,5%,<sup>xiv</sup> dando cuenta del limitado impacto de la “política salarial expansiva” del gobierno. En segundo lugar, tampoco la pobreza y la indigencia registraron mejoras, alcanzando hacia mayo de 2003 niveles cercanos al 52% y al 25%, respectivamente, en el GBA.

Atento a esta involución, y en el marco de un alto nivel de conflictividad social, el gobierno lanzó en el segundo trimestre de 2002 un programa de alcance inusitado – con cerca de dos millones de beneficiarios– con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo a los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos a cargo. Financiado gracias a la mejora en las cuentas fiscales, el impacto del Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJH) no es ajeno a la recomposición de las tasas de desocupación y al deterioro de las de subocupación. Con relación a la desocupación, las autoridades del INDEC se encargaron de señalar que si se calculaba la tasa de octubre de 2002 considerando como desocupados “a los ocupados cuya ocupación principal proviene de un Plan Jefes/Jefas”, busquen o no activamente empleo, la misma ascendería del 17,8% al 23,6%.<sup>xvi</sup> Del otro lado, es probable que buena parte del incremento del 7% de la tasa de subocupación registrado entre mayo y octubre de ese año también se encuentre asociado al impacto del plan. El Cuadro 2 ha sido elaborado a los fines de comparar el alcance del plan con relación a los programas que lo precedieron. Del mismo se desprende que, en términos relativos, en octubre de 2002 el PJJH triplicaba la incidencia de las ocupaciones provistas por los planes de empleo anteriores en el conjunto de la población ocupada –en el GBA– en mayo del mismo año. En el cuadro también se muestra el fuerte impacto del PJJH en el conjunto de

la población ocupada: su alcance involucraba, aproximadamente, a siete de cada cien personas ocupadas en el GBA.

**Cuadro 2**  
**Ocupados según tipo de inserción. GBA, 2000-2003**

Año y onda	Ocupados		
	Sin plan	Otro plan	Plan JJHD
2000 oct	99,1	0,9	-
2001 may	98,9	1,1	-
2001 oct	98,7	1,3	-
2002 may	97,7	2,3	-
2002 oct	92,9	0,3	6,9
2003 may	92,7	-	7,3

Fuente: elaboración propia, EPH, ondas mayo y octubre.

En el nuevo escenario, la desigualdad de IPCF ha registrado una leve mejora (ver Gráfico 1). Entre mayo y octubre de 2002 el CG para esta distribución se recuperó en un 3,3%, impulsado por la reversión de la tendencia al deterioro de la distribución de ingresos personales de una de las cuatro poblaciones consideradas: se observa en ese período una mejora en la dispersión de los ingresos de los activos (del 2% del CG) que arrastra consigo a la población que incluye también a los inactivos con ingreso. Por su parte, la dispersión de los ingresos de los asalariados muestra un importante deterioro de más del 6% del CG, que resulta levemente atenuado por el impacto de los ocupados no asalariados (Gráficos 3 y 4). Podemos suponer que, en conjunto, tales modificaciones estarían asociadas, en gran medida, a la puesta en vigencia del PJJH. El impacto del plan en términos de disminución selectiva de la desocupación ha contribuido a mermar la desigualdad de ingresos de los activos.<sup>xlvii</sup> Sin embargo, el plan mismo explica también el deterioro de la distribución de ingresos personales de los asalariados. La acentuación de la desigualdad en esta población obedecería al impacto de la magra asignación de los beneficiarios del plan –muchos de ellos considerados asalariados en la EPH–, que se encuentra muy por

debajo de la media de los asalariados (superior a los 600 pesos mensuales). Si bien el gobierno de la transición había impulsado también durante esa etapa un aumento en los salarios del sector privado, tal aumento parece haber tenido un nulo efecto sobre la desigualdad de ingresos personales.

La incidencia del PJJH es clara también al descomponer el ingreso de los asalariados. En este sentido, en el Gráfico 10 se observa –entre mayo y octubre de 2002– un incremento en la concentración de los ingresos mensuales de la ocupación principal de los asalariados (del 7,3%) que supera notablemente al registrado en los ingresos de la ocupación principal a tiempo completo (5,5%). De este modo, buena parte del deterioro de los ingresos mensuales de los asalariados estaría relacionado con el efecto sobre el valor del CG del incremento relativo de las ocupaciones a tiempo parcial, como son las provistas por el PJJH.

En suma, la mejora en la concentración del IPCF depende exclusivamente, por lo menos entre mayo y octubre de 2002, del impacto del PJJH. Esto se advierte claramente cuando se calcula el CG para la dispersión de IPCF descontando de los ingresos de los hogares aquellos correspondientes a la asignación del plan. Así, en lugar de registrarse una mejora en la concentración de los ingresos medios de los hogares del 3,3%, asistiríamos a un deterioro del CG del 0,2%, que alcanzaría un nivel récord de 0,56 puntos.<sup>xlviii</sup>

Por último, entre octubre de 2002 y mayo de 2003 es posible observar un estancamiento del mejoramiento distributivo con relación al ingreso per cápita familiar a pesar de cierta tendencia a la mejora en las restantes distribuciones. Por un lado, los indicios de reactivación y de estabilización de los precios internos parecen haber colaborado en la recomposición de la dispersión de los ingresos de los ocupados en general. La mejora en la concentración de los ingresos de los ocupados, del 1,7% del CG, duplica la registrada para los asalariados (0,9%), dando

cuenta de que tanto los asalariados como los no asalariados contribuyeron, en proporciones similares, a la disminución de la desigualdad de ingresos personales (Gráfico 1). Es posible que los incrementos salariales no remunerativos, dispuestos por el gobierno durante 2003 para el sector privado, y la restitución del 13% a los empleados estatales también hayan incidido favorablemente en el reparto del ingreso de los asalariados. La mejora en la distribución de ambas poblaciones estaría vinculada, en última instancia, a la menor concentración de las remuneraciones horarias, como surge del análisis por descomposición presentado en los Gráficos 7 a 10.

Por su parte, la reducción de los índices de desocupación –que experimentan una caída del 19% al 17% en este período (ver Tabla B del Anexo estadístico)– producto de la reversión de la fase recesiva, ha afectado positivamente la distribución del ingreso de los activos, que manifiesta una mejora del 3,5% (Gráfico 1). Sin embargo, si a pesar de la recomposición de la desigualdad de los ingresos personales la distribución del IPCF se ha estancado, tal situación podría explicarse, en parte, por el acentuamiento de la dispersión interdecílica de las tasas de actividad. Durante este período los niveles de actividad de los dos deciles de mayores ingresos se incrementan fuertemente, mientras que las tasas de actividad de los deciles de menores ingresos se reducen en forma sensible (Tabla A del Anexo estadístico). Además, a diferencia de lo señalado para octubre de 2002, en mayo de 2003 el efecto del PJJH parece haber alcanzado sus límites en términos de recomposición distributiva. Las características específicas del plan, cuya asignación y volumen de beneficiarios se encuentran congelados por restricciones formales, parecen erosionar su eficacia distributiva de corto plazo.<sup>xlix</sup>

## **Conclusiones: evolución secular y ciclos de desigualdad estilizados**

El proceso de reestructuración económica iniciado desde mediados de la década de 1970 no sólo significó un punto de no retorno al patrón de desarrollo anterior sino que sentó las bases materiales de un constante incremento de la desigualdad. Tarde o temprano, independientemente de su color político, las decisiones en materia económica de los distintos gobiernos contribuyeron a acrecentar la polarización social que hoy asume niveles trágicos. Dualización social, esa metáfora utilizada en los países centrales para dar cuenta de las nuevas características de las sociedades posindustriales, es en la Argentina actual una realidad estadísticamente comprobable.

A lo largo de este trabajo hemos dado cuenta de cierto comportamiento cíclico que se esconde detrás del persistente deterioro distributivo de los últimos treinta años. Como vimos, la evolución secular de la concentración de los ingresos se produce incrementalmente, a través de ciclos que operan en forma recurrente consolidando, por lo menos hasta la actualidad, los niveles de desigualdad inmediatamente anteriores a las crisis distributivas que los separan. Pero si bien la evolución de estos ciclos está dictada por los avatares de la coyuntura, las particularidades que asume cada uno de ellos dependen del nivel de profundización alcanzado por el proceso de transformación estructural de la economía. Así, el nuevo patrón distributivo que hoy caracteriza a la sociedad argentina es el emergente de la progresiva consolidación de las reformas estructurales iniciadas en la última dictadura militar, pero profundizadas por las opciones de política implementadas durante ulteriores gobiernos constitucionales.

En la prehistoria del deterioro distributivo se encuentra el proceso de estratificación salarial desencadenado por algunas de las medidas instrumentadas durante el PRN. En el marco de un régimen de alta inflación, la suspensión de las

convenciones colectivas y el congelamiento salarial decretados por las autoridades de facto hicieron que el primer ciclo de desigualdad estuviera claramente impulsado por la concentración de los ingresos de los asalariados. En un contexto que se mantuvo cercano al pleno empleo los trabajadores de mayores calificaciones lograron atenuar la caída de sus ingresos reales en mayor medida que aquellos con menores credenciales educativas. Hacia 1981, observamos un violento incremento de la desigualdad de los ingresos que encuentra su origen en la intensificación, por los altos niveles de inflación que siguieron al abandono de la política de devaluaciones programadas (tablita), del proceso de estratificación salarial. La crisis económica que dio fin al programa monetario iniciado hacia 1977 fue, como vimos, el resultado de la alta vulnerabilidad externa a la que había quedado sometida la economía doméstica luego de la reforma financiera y la apertura comercial, primigenios pilares que sentaron las bases del proceso de reforma.

No obstante la recomposición de los niveles de desigualdad que acompañó los últimos años del PRN y los primeros del gobierno de la transición democrática, las secuelas derivadas de la primera fase de transformaciones estructurales parecieron irreversibles. La destrucción de buena parte del aparato productivo, la gran concentración de capitales, la pesada carga de la deuda pública y los altos niveles de inflación, todos ellos heredados del período militar, conminaron al país a un estancamiento crónico a lo largo de una década perdida. Con un gobierno que progresivamente asumía como propio el ideario de los principales actores económicos locales y extranjeros, el deterioro distributivo del segundo quinquenio de los '80 obedecería también a un desigual reparto de los salarios, pero que esta vez no estaría asociado a algún tipo de estratificación educativa sino, probablemente, sectorial. El leve pero constante incremento de la desocupación, cuya incidencia diferencial afectaría principalmente a los hogares más pobres, parece haber



contribuido también a ese deterioro, dando cuenta de los primeros síntomas de la baja capacidad de absorción de mano de obra que caracterizaría en adelante al modelo económico emergente. Sin embargo, la baja incidencia de los desocupados sobre el pico distributivo registrado durante la crisis de 1989 es un indicador de que tal problema no había asumido aún los niveles endémicos que se advertirán en la década siguiente. El deterioro distributivo desencadenado por esa crisis es el resultado de la desigual distribución de las capacidades de los ocupados (asalariados y no asalariados) para lidiar con el proceso hiperinflacionario abierto.

Bajo el apogeo de la administración menemista, la Argentina transcurrió a lo largo de más de una década en una virulenta secuencia de opciones de política de corte neoliberal, signada por la reversión de la injerencia estatal en la economía. La impronta de la ortodoxia vernácula y foránea no es ajena a la segunda gran oleada de reformas estructurales a las que la sociedad argentina asistió inerme. La mirada de las instancias gubernamentales se mantuvo, durante esos años, en una tan sobreactuada como extraviada atención en el control del gasto, la autorregulación del mercado y los intereses de las fracciones dominantes del establishment, demostrando un mínimo interés por los amplios sectores de la población que esperaban el “derrame” prometido por los defensores del modelo. La explosiva combinación de reformas estructurales y de políticas de estabilización centradas en el anclaje del tipo de cambio exponenciaron ampulosamente la herencia del período dictatorial. Endeudamiento masivo, desindustrialización y extranjerización quedaron ocultos entonces detrás de la publicitada estabilidad de precios y el crecimiento económico. La progresiva exclusión de vastos sectores de la población fue el principal síntoma de las características que asumiría en adelante el ahora consolidado “modelo de desarrollo”. La baja elasticidad producto-empleo de la economía se intensificó considerablemente y la desocupación entró en escena

arrastrando consigo el deterioro distributivo durante los primeros años de la década. Así, la crisis distributiva desatada hacia 1995, en cuyo germen se encuentra la exacerbada vulnerabilidad externa de la economía, estuvo guiada novedosamente por el efecto de la desocupación y, dados los altos índices de desempleo, la incipiente reaparición de un proceso de estratificación salarial por devaluación educativa.

La recuperación económica posterior a la crisis de 1995 incrementó la heteronomía de la política local frente a las arbitrariedades de los organismos financieros internacionales. El sesgo fiscalista predominó desde entonces como último recurso para lisonjear a los acreedores externos, única y costosa fuente que quedaba entonces para dar liquidez a una economía local atada a los límites impuestos por un intocable modelo de caja de conversión. Restricción fiscal y endeudamiento caracterizaron a un ciclo de crecimiento poco sustentable en el tiempo y que, dada la pervivencia de las reformas estructurales, no logró revertir la elevada concentración del producto social. La inminente fase recesiva fue acompañada por la asunción de un nuevo gobierno que extremó los niveles de endeudamiento soberano y, por tanto, la subordinación a los organismos financieros con el objetivo de conservar los lineamientos heredados de la década anterior. La restricción del gasto público encontró su máxima expresión en esta etapa de la mano de políticas que llegaron a supeditar los salarios estatales a los ingresos fiscales. Los costos sociales de tal opción fueron altos: la escasa absorción de mano de obra se mantuvo y a los altos índices de desempleo se sumó el incremento de la subocupación horaria. El deterioro distributivo de esos años estuvo pues gobernado por la incidencia de la desocupación, la intensificación del proceso de estratificación salarial y el desigual reparto de las horas laborales. El final de la convertibilidad monetaria llegó en el marco de una aguda crisis política con altos niveles de

conflictividad social y significó también, como era previsible, un pico distributivo sin precedentes. Sin embargo, la peculiaridad de la crisis distributiva posterior a la devaluación no encuentra paralelo en las anteriores: la mayor concentración de ingresos desatada tras el fin de la convertibilidad estuvo exclusivamente gobernada por la incidencia del desempleo.

La leve recuperación de la distribución del ingreso posterior a la devaluación parecería indicarnos el inicio de un nuevo proceso de recomposición en los niveles de desigualdad. Sin embargo, tal apariencia se desvanece, por lo menos hasta mayo de 2003,<sup>1</sup> cuando consideramos que el origen de la mejora distributiva está dado por el impacto de una política social de amplio alcance, pero de características similares a las estrategias de asistencialismo compensatorio promovidas por los organismos financieros internacionales durante los años '90. No obstante, es posible que un nuevo ciclo de desigualdad comience en los albores del nuevo milenio. Pero es improbable que la tendencia al deterioro secular de la distribución del ingreso se revierta sustancialmente con la sola modificación del esquema cambiario. En el origen de la desigualdad se encuentran las transformaciones en el modo de funcionamiento económico local desatadas por la progresiva serie de reformas estructurales que han acompañado a la Argentina durante los últimos treinta años y, ante la ausencia de iniciativas tendientes a revertirlas, es probable que la dinámica cíclica vuelva a contribuir al deterioro de largo plazo.

## Anexo metodológico

Existen diversas formas de analizar el grado de desigualdad de ingresos existente en una determinada población y su evolución a lo largo del tiempo. En general, todas ellas buscan evaluar las tendencias que asume la dispersión de una determinada variable referida a los ingresos de la población y detectar los diversos factores que influyen en sus eventuales modificaciones. La variable a explicar, generalmente seleccionada en este tipo de investigaciones como la más relevante para el estudio del bienestar de una población, es el ingreso mensual familiar per cápita (IPCF). Los factores que inciden en la dispersión del IPCF son, justamente, aquellos de los que depende esta variable.

Como sabemos, el IPCF es un indicador construido a partir de una medida resumen de los ingresos de cada hogar: la media de los ingresos de sus integrantes, esto es, la relación entre el ingreso total familiar mensual (ITF) y la cantidad de miembros del hogar ( $m$ ). El IPCF puede ser descompuesto también en función de una serie de características propias de cada hogar, tales como la cantidad de integrantes del hogar, la cantidad de miembros perceptores de ingresos ( $p$ ) y los ingresos personales mensuales de los perceptores (IPT). En principio, de lo anterior se desprende que la evolución de la dispersión del IPCF en una población determinada depende de los cambios en esas dos grandes variables: el ingreso mensual de los perceptores y la proporción de miembros perceptores del hogar. No obstante, poco *explican* estas dos variables. ¿De qué depende, por ejemplo, la dispersión de los ingresos de los perceptores, que conforman un conjunto heterogéneo de individuos cuyo único denominador común es recibir ingresos mensuales de diversas fuentes? Para dar cuenta de los cambios en la distribución del IPCF es necesario desglosar a los perceptores en distintos grupos –inactivos,

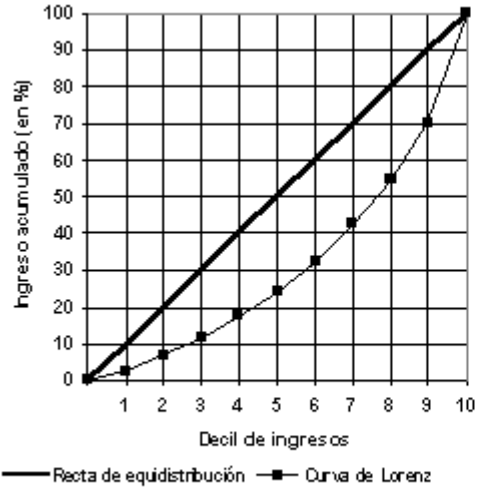
activos, ocupados, asalariados– y analizar la evolución de la dispersión de los ingresos de estos grupos.

El método que aquí utilizamos consiste, pues, en comparar la evolución de la desigualdad de la distribución del IPCF con la dispersión de los ingresos individuales de distintas poblaciones de perceptores. Así, la desigualdad a explicar –IPCF– dependerá de la desigual distribución del ingreso individual de: a) los activos e inactivos perceptores (entre los que se contabilizan a los jubilados, pensionados, rentistas, etc.); b) los activos (entre los que quedan incluidos los desocupados); c) los ocupados (que contemplan a los no asalariados), y d) los asalariados. Evidentemente, existe un vacío explicativo entre las dos variables de referencia utilizadas para evaluar la desigualdad de ingresos: la primera de ellas, el IPCF, da cuenta de una medida resumen que involucra a los miembros de una unidad agregada (el hogar); la segunda, el ingreso individual, refiere a cada uno de los integrantes de los distintos hogares tomados como casos individuales. Sin embargo, las eventuales diferencias que puedan existir entre las tendencias de los indicadores referidos a cada una de estas dos variables pueden ser esclarecidas a la luz de variaciones sustanciales en las tasas de actividad y desocupación de los distintos deciles de IPCF. De este modo, un incremento (o una reducción) importante en las tasas de actividad de los deciles de menores ingresos empuja a la baja (o al alza) la concentración del IPCF. Del mismo modo, un cambio en la incidencia decílica de la desocupación puede resultar igualador (o desigualador) cuando se reduce (o incrementa), en términos relativos, la desocupación de los deciles de menores ingresos.<sup>i</sup>

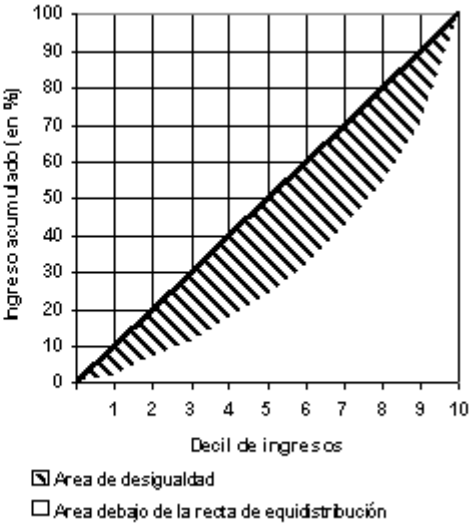
Ahora bien, para contemplar los cambios en la distribución del ingreso de cada una de las poblaciones consideradas resulta necesario contar con una medida resumen de la dispersión. El coeficiente de Gini es comúnmente utilizado a estos

fin. A diferencia de las medidas estadísticas generalmente empleadas para dar cuenta de la dispersión de un conjunto de datos, el coeficiente de Gini se construye comparando la distribución observada de una serie de datos con cierta distribución ideal o recta de equidistribución. Sin embargo existen diversas formas de derivar la expresión algebraica para calcularlo.<sup>ii</sup> Cuando sólo se cuenta con datos agregados – como los provistos en nuestro país por las tabulaciones de la EPH publicadas por el INDEC– la forma más sencilla de deducir el valor del coeficiente consiste en partir de la Curva de Lorenz (Gráfico A), que no es sino la representación gráfica de la desigualdad de un conjunto de datos. El –así llamado– método geométrico para deducir el valor del indicador no es sino el cómputo de la relación entre la superficie de desigualdad –aquella limitada por la Curva de Lorenz y la recta de distribución ideal– y el área contemplada por debajo de la recta de equidistribución (ver Gráfico B).

**Gráfico A**



**Gráfico B**



El trabajo con datos agregados conduce, necesariamente, a la pérdida de información y a la subestimación de los niveles de desigualdad. Para evitar incurrir en esta pérdida de información existen técnicas estadísticas que permiten calcular el

valor del coeficiente cuando se cuenta con datos desagregados. La que hemos utilizado en este trabajo se basa en el cómputo de la sumatoria de las diferencias entre las frecuencias relativas acumuladas de población ( $P_i$ ) y de ingresos ( $Y_i$ ). Con el objeto de estandarizar el coeficiente entre los valores 0 (mejor distribución) y 1 (mayor desigualdad), se divide la sumatoria de las diferencias por la sumatoria de las frecuencias relativas acumuladas de población ( $P_i$ ). La siguiente expresión algebraica resume lo anterior:

$$CG = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (P_i - Y_i)}{\sum_{i=1}^{n-1} P_i}$$

Finalmente, es necesario destacar también los límites de una medida resumen tan generalizada como el coeficiente de Gini. Si bien constituye una medida de fácil cómputo, el coeficiente de Gini no cumple con la propiedad de descomposición aditiva. Esto significa que el valor del coeficiente para una población determinada no es equivalente a la simple adición de los valores que asume para distintos subgrupos de esta población. Ahora bien, no obstante existen medidas resumen alternativas para el cálculo de la dispersión de ingresos que satisfacen tal propiedad aditiva, el método empleado en este trabajo permite salvar esta dificultad. En la confección de cada una de las poblaciones cuya dispersión de ingresos evaluamos en este trabajo hemos guardado una lógica particular que se puede resumir, recurriendo a la notación de teoría de conjuntos, de la siguiente manera:

$$U = \{x / x \text{ es hogar en el que todos los miembros declaran la totalidad de sus ingresos}\}$$

$$A = \{x \in U / x \text{ es miembro de hogar}\}$$

$$B = \{x \in A / x \text{ es activo} \vee x \text{ es inactivo con ingreso}\}$$

$$C = \{x \in A / x \text{ es activo}\}$$

$$D = \{x \in A / x \text{ es ocupado con ingreso}\}$$

$$E = \{x \in A / x \text{ es asalariado con ingreso}\}$$

De este modo, cada una de las poblaciones menos numerosas consideradas para los cálculos del coeficiente están incluidas en las poblaciones más numerosas. Así, se verifican las siguientes relaciones entre los distintos conjuntos:

$$(B \subseteq A) \rightarrow (b \in A);$$

$$(C \subseteq B) \rightarrow (c \in B); (C \subseteq A) \rightarrow (c \in A);$$

$$(D \subseteq C) \rightarrow (d \in C); (D \subseteq B) \rightarrow (d \in B); (D \subseteq A) \rightarrow (d \in A);$$

$$(E \subseteq D) \rightarrow (e \in D); (E \subseteq C) \rightarrow (e \in C); (E \subseteq B) \rightarrow (e \in B); (E \subseteq A) \rightarrow (e \in A).$$

De resultados, la diferencia entre los coeficientes de Gini (CG) de los distintos grupos, calculados en base a la misma variable –ingreso personal total– puede ser atribuida a la incidencia de la población excluida en el grupo menos numeroso. En resumen, la diferencia entre el CG de los ocupados y el de los asalariados da cuenta de la incidencia de los ocupados no asalariados en la desigualdad de ingresos personales; del mismo modo, la distancia entre el coeficiente de los activos y el de los ocupados revela influencia de la población desocupada; la diferencia entre los valores que asume el coeficiente para los activos e inactivos perceptores y para los activos despeja el efecto en la dispersión operado por los inactivos perceptores de ingreso. Por último, como todas las poblaciones menores están incluidas en la población más numerosa, las dispersiones de los ingresos individuales evaluadas son relevantes para dar cuenta de lo que ocurre con la desigualdad en la distribución del IPCF.



## Anexo estadístico

**Tabla A**  
**GBA, 1974-1995. Tasas de actividad según deciles de ingreso per cápita familiar**  
**(personas con o sin ingreso)**

Deciles IPCF	74	80	81	82	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	1	20,0	21,0	32,2	25,4	20,6	22,5	22,3	21,7	23,0	23,6	22,3	21,9	21,9	24,2	27,8
2	25,5	23,6	30,5	25,7	22,6	22,3	23,0	24,3	28,3	27,5	25,1	22,3	26,6	28,5	29,3	30,6
3	26,9	29,0	30,6	28,8	26,4	29,3	30,5	25,4	28,6	25,7	25,4	29,8	32,0	28,3	30,1	35,9
4	32,2	32,4	39,4	32,4	29,6	29,0	33,6	30,7	34,2	36,2	32,8	33,8	27,5	36,1	36,5	34,6
5	33,7	33,2	38,3	35,7	33,5	30,7	28,8	35,1	38,2	33,8	35,2	28,6	38,8	36,1	40,7	43,4
6	37,2	39,1	39,4	35,4	35,2	37,8	38,6	39,0	37,4	35,5	33,6	37,4	41,5	44,2	41,5	43,9
7	44,7	45,1	39,8	39,4	41,5	45,4	46,0	44,3	42,8	42,5	41,5	44,2	44,0	49,0	48,5	47,6
8	50,9	50,6	37,0	46,7	48,4	46,6	47,3	45,9	46,9	48,0	47,2	50,1	52,2	52,9	51,9	52,0
9	53,8	48,2	37,2	53,1	52,8	48,0	52,9	51,8	52,4	51,6	54,9	53,9	53,2	56,0	53,4	54,0
10	62,0	52,8	39,5	55,4	58,6	57,6	56,5	57,7	59,1	58,2	64,3	64,6	64,1	64,5	65,5	62,4
<b>Total</b>	<b>38,7</b>	<b>37,5</b>	<b>36,4</b>	<b>37,8</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>37,9</b>	<b>37,6</b>	<b>39,1</b>	<b>38,3</b>	<b>38,2</b>	<b>38,7</b>	<b>40,2</b>	<b>42,0</b>	<b>42,5</b>	<b>43,5</b>

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, ondas octubre.

**Tabla A (continuación)**  
**GBA, 1996-2003. Tasas de actividad según deciles de ingreso per cápita familiar**  
**(personas con o sin ingreso)**

Deciles IPCF	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003
	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may
1	29,7	33,6	31,9	32,2	31,0	29,9	32,1	30,3	30,2	30,3	30,9	30,4	32,8	31,6	29,1
2	33,3	33,8	32,9	33,1	32,6	32,3	33,0	31,8	31,6	32,0	32,1	33,5	33,6	35,9	34,2
3	34,1	36,1	35,6	33,4	34,9	35,9	35,7	35,1	35,8	36,3	34,2	34,0	35,7	39,7	37,3
4	33,7	33,6	36,4	38,5	37,1	38,2	39,1	37,7	37,0	35,7	36,6	38,4	37,0	39,8	41,3
5	40,9	42,0	42,5	41,4	43,5	41,2	43,7	40,5	41,8	39,1	43,3	39,5	37,7	41,9	46,2
6	42,0	42,8	45,0	43,1	43,6	44,8	45,2	44,9	42,1	44,8	43,0	41,8	42,8	42,7	40,8
7	47,8	49,9	49,9	47,4	51,9	47,9	49,4	52,5	52,0	50,1	47,5	46,1	45,1	47,8	45,2
8	49,3	50,5	53,9	54,4	52,9	54,6	54,4	54,5	50,3	51,4	54,1	52,4	49,8	51,6	51,1
9	53,8	55,5	55,9	60,1	59,6	57,6	59,2	58,0	58,4	58,1	55,7	52,7	54,3	54,4	57,1
10	62,7	60,9	61,8	62,7	64,3	66,5	66,8	66,8	64,0	64,0	64,3	63,5	61,2	61,8	64,9
<b>Total</b>	<b>42,7</b>	<b>43,9</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>45,1</b>	<b>44,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,2</b>	<b>44,3</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,0</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, ondas mayo y octubre.

**Tabla B**  
**GBA, 1974-1995. Tasas de desocupación según deciles de ingreso per cápita familiar**  
**(personas con o sin ingreso)**

Deciles IPCF	74	80	81	82	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
1	10,8	4,8	12,5	14,8	17,9	17,5	20,3	21,1	24,5	30,2	29,5	21,5	29,9	37,1	47,0	47,4
2	4,7	1,3	2,2	9,0	6,5	10,6	10,3	9,4	10,7	16,5	9,5	8,7	19,2	18,8	21,6	32,7
3	3,5	4,1	1,4	7,2	3,3	7,6	8,3	5,4	9,7	11,0	10,2	9,5	11,0	18,9	21,9	24,5
4	1,7	2,5	0,7	5,3	4,2	6,4	5,3	7,5	7,2	10,9	10,8	6,9	11,9	12,0	16,4	22,1
5	3,8	1,7	0,4	2,8	4,2	5,1	4,0	6,2	6,0	7,1	7,4	5,0	10,2	11,4	16,2	20,5
6	3,3	3,0	0,7	3,7	2,8	2,8	3,4	4,3	5,8	8,3	5,6	4,4	7,2	10,6	13,4	18,4
7	2,1	1,7	1,3	2,6	0,8	3,1	3,3	3,5	2,2	4,1	4,2	4,4	3,1	7,4	10,0	14,2
8	1,2	1,2	0,6	1,8	3,1	2,6	1,4	2,6	2,2	2,8	3,2	1,5	3,8	4,8	7,0	11,0
9	1,6	1,6	1,2	0,8	1,6	1,6	1,9	1,0	2,2	1,6	1,5	2,4	1,1	3,4	5,3	7,5
10	0,6	0,8	0,0	0,0	0,8	1,3	0,9	1,7	1,8	1,8	2,3	0,7	1,2	3,0	2,2	3,6
<b>Total</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>10,2</b>	<b>13,4</b>	<b>17,6</b>

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, ondas octubre.

**Tabla B (continuación)**  
**GBA, 1996-2003. Tasas de desocupación según deciles de ingreso per cápita familiar**  
**(personas con o sin ingreso)**

Deciles IPCF	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003
	May	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may	oct	may
1	48,5	50,7	46,3	40,4	39,7	39,4	47,0	39,2	43,6	45,1	49,6	50,7	53,6	42,1	31,5
2	31,9	34,6	26,1	26,2	28,0	25,5	27,3	28,2	27,9	23,1	31,6	35,0	39,6	35,3	31,5
3	27,2	28,4	30,4	21,1	18,5	22,6	24,4	22,1	28,4	23,4	23,2	27,0	34,3	25,5	22,8
4	21,9	21,0	21,2	18,5	19,5	18,0	21,2	18,4	20,5	20,3	18,8	24,8	24,9	25,9	24,3
5	22,9	22,5	20,3	16,5	18,4	15,3	20,0	15,4	18,9	16,4	18,8	22,5	21,5	23,5	22,1
6	16,1	16,8	18,3	14,9	14,5	12,7	13,6	13,2	18,1	12,3	18,8	17,5	23,5	18,9	17,4
7	13,6	15,0	10,0	11,4	13,0	9,3	11,0	12,6	14,8	13,2	15,4	16,7	18,7	14,5	18,0
8	9,3	10,8	8,2	9,5	7,0	7,4	7,4	10,4	9,8	8,4	10,4	13,8	19,3	13,1	9,5
9	8,6	7,3	9,1	5,9	3,2	4,2	7,7	6,5	5,8	7,3	6,5	8,1	10,1	9,4	9,4
10	5,1	6,3	5,0	4,1	3,0	3,3	4,0	4,3	5,3	3,3	4,9	4,2	3,8	5,6	3,3
<b>Total</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>	<b>17,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>13,4</b>	<b>15,8</b>	<b>14,7</b>	<b>16,8</b>	<b>14,9</b>	<b>17,3</b>	<b>19,4</b>	<b>22,4</b>	<b>19,4</b>	<b>17,0</b>

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, ondas mayo y octubre.

**Tabla C**  
**Indicadores económicos, inflación e indicadores socioeconómicos. 1970-2003**

Año	Indicadores económicos (millones de pesos 1993)*				Inflación**		Indicadores socioeconómicos***	
	PBI	PBI P/C	Exportaciones	Importaciones	Mensual	Anual	Desocupación	Subocupación
1970	147783	6325	7522	8447	1.7	21.7	-	-
1971	154802	6509	6779	9203	2.8	39.1	-	-
1972	159353	6582	6882	8513	4.2	64.1	-	-
1973	166477	6755	7682	7875	3.1	43.8	-	-
1974	177698	7083	7715	9059	2.9	40.1	5.0	-
1975	178762	6999	6891	9712	13.4	335.0	3.4	-
1976	179689	6912	9100	7272	13.8	347.5	3.5	-
1977	193028	7294	11362	9299	8.3	160.4	3.8	-
1978	188362	6992	12243	8371	8.6	169.8	5.2	-
1979	202979	7401	11965	12606	7.6	139.7	4.4	-
1980	206506	7389	10507	17031	5.4	87.6	3.9	-
1981	194645	6856	11097	15690	7.3	131.3	2.7	-
1982	188516	6537	11532	9007	10.0	209.7	4.2	-
1983	195554	6676	11857	8402	15.0	433.7	2.3	-
1984	199130	6692	11614	8847	18.8	688.0	2.6	-
1985	185960	6152	13353	7655	14.7	385.4	2.4	-
1986	199568	6500	12009	8854	5.1	81.9	2.6	-
1987	204719	6564	11569	9994	8.9	174.8	2.5	-
1988	200867	6340	13551	8755	14.3	387.7	4.2	-
1989	188378	5853	14446	7197	46.5	4923.5	6.0	-
1990	188500	5795	17057	7194	28.0	1343.9	5.3	9.3
1991	205283	6230	15796	11974	5.4	84.0	6.3	8.9
1992	223047	6682	15622	19913	1.4	17.5	6.9	8.6
1993	236505	6994	16341	22028	0.6	7.4	6.0	7.9
1994	250308	7306	18840	26682	0.3	3.9	6.9	8.3
1995	243186	7007	23085	24066	0.1	1.6	7.0	8.1
1996	256626	7299	24850	28284	0.0	0.1	9.9	8.8
1997	277441	7789	27876	35884	0.0	0.3	9.3	9.3
1998	288123	7985	30838	38904	0.1	0.7	10.7	10.2
1999	278369	7615	30449	34521	-0.2	-1.8	12.1	10.4
2000	276173	7458	31272	34466	-0.1	-0.7	18.4	11.3
2001	263997	7049	32129	29659	-0.1	-1.5	16.6	12.5
2002	235236	6210	33123	14812	2.9	41.0	17.1	12.6
2003	256023	6683	35108	20376	0.3	3.7	17.3	13.6
							16.1	13.2
							13.7	13.1
							13.2	13.3
							12.4	13.6
							14.5	13.7
							13.8	14.3
							15.4	14.5
							14.7	14.6
							16.4	14.9
							18.3	16.3
							21.5	18.6
							17.8	19.9
							15.6	18.8

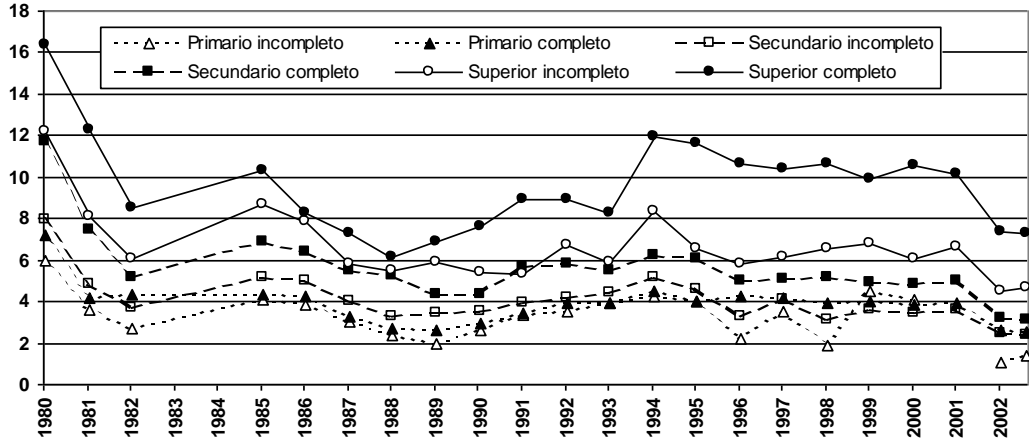
\*Fuente: elaboración propia en base a Gerchunoff y Llach (2003), INDEC y Dir. de Cuentas Nacionales, total del país.

\*\*Fuente: elaboración propia en base a INDEC, serie histórica IPC base 1999=100, GBA.

\*\*\*Fuente: INDEC, ondas mayo y octubre, total de aglomerados urbanos relevados por la EPH.

## Gráfico A

Media de la remuneración horaria real de la ocupación principal de los asalariados según nivel de educación alcanzado (en pesos)



Fuente: elaboración propia en base a EPH, GBA, 1980-2002 onda octubre y onda mayo para 2003.

## Referencias bibliográficas

- Altimir, O. y L. Beccaria (2001), "El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina", en *Desarrollo Económico*, N° 160 (Buenos Aires).
- Altimir, O., et al. (2002), "La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000", en *Revista de la CEPAL*, N° 78, Diciembre (Buenos Aires).
- Azpiazu, D., et al (1986), *El nuevo poder económico* (Hyspamérica, Buenos Aires).
- Azpiazu, D., et al. (2000), *La reestructuración y el redimensionamiento de la producción industrial argentina durante las últimas décadas* (Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires).
- Basualdo, E., et al. (2002), *Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la administración Duhalde* (Instituto de estudios y formación de la CTA, Buenos Aires).
- Beccaria, L. (1991), "Distribución del ingreso en la Argentina: explorando lo sucedido desde mediados de los setenta", en *Desarrollo Económico*, N° 123 (Buenos Aires).
- Bisang, R., et al. (1996), "La transformación industrial en los noventa. Un proceso con final abierto", en *Desarrollo Económico*, número especial (Buenos Aires).
- Boletín Oficial de la República Argentina* del 28/3/91.
- Calvi, G. y C. Zibecchi (2004), "El Plan Jefes y Jefas. Cambios y continuidades en materia de programas sociales", en *Textos para pensar la realidad*, N° 5 (La Plata).
- Camou, A. (1999), "Los consejeros de Menem", en *Cuadernos del CISH*, N° 5 (UNLP, La Plata).
- Carciofi, R. (1990), "La desarticulación del pacto fiscal: una interpretación sobre la evolución del sector público argentino en las dos últimas décadas", *Documentos de Trabajo CEPAL*, N° 36 (Buenos Aires).
- Cooper, R. (1994), *Auge, crisis y auge. La experiencia macroeconómica de los países en desarrollo, 1970-1990*, (Banco Mundial, Washington DC).
- Damill, M. (2000), *El balance de pagos y la deuda externa pública bajo la convertibilidad* (CEDES, Buenos Aires).
- Damill, M. y R. Frenkel (1993), "Restauración democrática y política económica: Argentina, 1984-1991", en Morales, J.A. y G. McMahon (eds.), *La política económica en la transición a la democracia. Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay*, (Ediciones CIEPLAN, Santiago de Chile).
- Damill, M., et al. (2002), *Argentina. Una década de convertibilidad* (OIT, Santiago de Chile).
- Diamond, M. (1973), *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia* (Paidós, Buenos Aires).
- Gasparini, L. y Sosa Escudero, W. (1999), "Bienestar y distribución del ingreso en la Argentina, 1980-1998" en *XXXIV Reunión de la AAEP* (Rosario).
- Gasparini, L., et al. (2000), "La distribución del ingreso en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires", en *Cuadernos de Economía*, N° 49 (La Plata).
- Gasparini, L., et al. (2001), *La distribución del ingreso en la Argentina*, Premio Fulvio Salvador Pagani (Fundación Arcor).
- Gerchunoff, P. y J. C. Torre (1996), "La política de liberación económica en la administración de Menem", en *Desarrollo Económico*, N° 143, (Buenos Aires).
- Gerchunoff, P. y L. Llach (2003), *El ciclo de la ilusión y el desencanto* (Ariel, Buenos Aires).
- Grandes, M. y P. Gerchunoff (1998), "Distribución del ingreso y mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires. 1987-1997", en *4º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo* (ASET, Buenos Aires).
- INAP (1997), *Organización del Estado y de la Administración Pública Nacional de la República Argentina* (Buenos Aires).
- INDEC (2002), *Comunicado de prensa del 27 de diciembre de 2002* (Buenos Aires).

- Levit, C. y R. Ortiz (1999), "La hiperinflación argentina: prehistoria de los años noventa", en *Epoca*, N° 1 (Buenos Aires).
- Medina, F. (2001), "Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso", en *Serie estudios estadísticos y prospectivos*, N° 9 (CEPAL, Santiago de Chile).
- Novick, M. (2004), "Costos laborales en la Argentina 2003. Un análisis comparativo", en *Serie de documentos de trabajo*, N° 1 (Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, MTESS, Buenos Aires).
- O'Donnell, G. (1982), *El Estado burocrático-autoritario* (Ed. Belgrano, Buenos Aires).
- Quiroga, H. (1989), *Autoritarismo y Reforma del Estado* (CEAL, Buenos Aires).
- Sidicaro, R. (1996), "El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa", en H. Quiroga (comp.), *A veinte años del golpe* (Homo Sapiens, Buenos Aires).
- Sidicaro, R. (2001), *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)* (Libros del Rojas, Buenos Aires).
- Williamson, J. (1990), "What Washington means by policy reform", en J. Williamson (org.), *Latin American Adjustment* (Institute for International Economics, Washington).
- Williamson, J. (1996), "The Washington Consensus revisited", en *Development Thinking and Practice Conference, Main Papers* (Washington).

## Notas

<sup>i</sup> Los datos sobre PBI y PBI per cápita fueron calculados a partir de las series de Gerchunoff, P. y L. Llach (2003), *El ciclo de la ilusión y el desencanto* (Ariel, Buenos Aires), Apéndice Estadístico; de las series publicadas por el Ministerio de Economía, y de las estimaciones de crecimiento intercensal del INDEC.

<sup>ii</sup> Debido a la falta de disponibilidad de series de datos para el total del país, la información sobre distribución del ingreso refiere sólo al aglomerado Gran Buenos Aires (GBA), principal unidad económico-demográfica de la Argentina.

<sup>iii</sup> Los valores del coeficiente de Gini presentados en esta sección han sido calculados con los datos agregados que surgen de las tabulaciones publicadas por el INDEC. Ver Anexo metodológico.

<sup>iv</sup> Los datos con los que se cuenta para evaluar la distribución del ingreso anterior a 1974 no son estrictamente comparables a los que surgen de la EPH, pues han sido elaborados a partir de otros relevamientos. Por otra parte, no hay datos disponibles de dispersión de ingresos para los años 1975 a 1979 y 1983, por lo cual el análisis de su evolución durante el último período militar sólo refleja lo acontecido entre 1980 y 1982. En este sentido, tampoco es posible determinar específicamente en qué momento se desencadena el cambio que se percibe en la distribución del ingreso a partir de 1980: con los datos disponibles no podemos diferenciar claramente el efecto de la fuerte devaluación operada durante la gestión económica de Celestino Rodrigo (1975) del vinculado a las primeras iniciativas en materia económica del PRN.

<sup>v</sup> Se debe considerar que el coeficiente de Gini es una medida resumen estandarizada entre los valores 0 y 1. El valor máximo de esta medida (1) representa la mayor concentración de ingresos posible en una determinada población, mientras que el valor mínimo (0) representa la distribución más equitativa. Ver Anexo metodológico.

<sup>vi</sup> Cf. Altimir, O. y L. Beccaria (2001), “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina”, en *Desarrollo Económico*, N° 160 (Buenos Aires); Grandes, M. y P. Gerchunoff (1998), “Distribución del ingreso y mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires. 1987-1997”, en *4° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo* (ASET, Buenos Aires). Ver Anexo metodológico.

<sup>vii</sup> Muchos han señalado las debilidades relativas al registro de ingresos en la EPH: las omisiones y subdeclaraciones subestiman los niveles de desigualdad al concentrarse en sectores de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, tal problema no afectaría la comparación interanual mientras la estructura de subregistro y subdeclaración no se modifique significativamente en el tiempo, como han demostrado los trabajos de Gasparini, L., *et al.* (2000), “La distribución del ingreso en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires”, en *Cuadernos de Economía*, N° 49 (La Plata), y Gasparini, L. y Sosa Escudero, W. (1999), “Bienestar y distribución del ingreso en la Argentina, 1980-1998” en *XXXIV Reunión de la AAEP* (Rosario).

<sup>viii</sup> Ver Anexo metodológico.

<sup>ix</sup> Cf. O'Donnell, G. (1982), *El Estado burocrático-autoritario* (Ed. Belgrano, Buenos Aires).

<sup>x</sup> Cf. Sidicaro, R. (1996), “El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa”, en H. Quiroga (comp.), *A veinte años del golpe* (Homo Sapiens, Buenos Aires).

<sup>xi</sup> Cf. Damill, M. y R. Frenkel (1993), “Restauración democrática y política económica: Argentina, 1984-1991”, en Morales, J.A. y G. McMahon (eds.), *La política económica en la transición a la democracia. Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay*, (Ediciones CIEPLAN, Santiago de Chile).

<sup>xii</sup> Cf. Altimir, O., *et al.* (2002), “La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000”, en *Revista de la CEPAL*, N° 78, Diciembre (Buenos Aires).

<sup>xiii</sup> Cf. Damill, M. y R. Frenkel, *op. cit.*, pág. 45.

<sup>xiv</sup> Ver, entre otros, Carciofi, R. (1990), “La desarticulación del pacto fiscal: una interpretación sobre la evolución del sector público argentino en las dos últimas décadas”, *Documentos de Trabajo CEPAL*, N° 36 (Buenos Aires); Azpiazu, D., *et al.* (1986), *El nuevo poder económico* (Hyspamérica, Buenos Aires); Quiroga, H. (1989), *Autoritarismo y Reforma del Estado* (CEAL, Buenos Aires).

<sup>xv</sup> Cf. Altimir, O. y L. Beccaria (2001), *op. cit.*, pág. 597.

<sup>xvi</sup> Ver Anexo metodológico.

<sup>xvii</sup> Cf. Beccaria, L. (1991), “Distribución del ingreso en la Argentina: explorando lo sucedido desde mediados de los setenta”, en *Desarrollo Económico*, N° 123 (Buenos Aires), pág. 331.

<sup>xviii</sup> Cf. Cooper, R. (1994), *Auge, crisis y auge. La experiencia macroeconómica de los países en desarrollo, 1970-1990*, (Banco Mundial, Washington DC), pág. 9.

<sup>xix</sup> Cf. Gerchunoff, P. y L. Llach, *op. cit.*, pág. 375.

<sup>xx</sup> Esta política salarial expansiva sería denunciada durante la campaña del candidato presidencial de la UCR como expresión de un “pacto militar-sindical”.

<sup>xxi</sup> Cf. Gerchunoff, P. y L. Llach, *op. cit.*, pág. 397.

<sup>xxii</sup> Cf. Damill, M. y R. Frenkel, *op. cit.*

<sup>xxiii</sup> Según diversos autores la crisis hiperinflacionaria de 1989 es el emergente de cierta contradicción manifiesta entre las dos principales fracciones del establishment que se disputaban las transferencias del Estado desde

---

principios de la década del '80: los grupos concentrados locales y los acreedores externos. Ante la cesación de pagos de 1988, serán los bancos extranjeros los encargados de desatar el ataque especulativo en el mercado cambiario, que terminará por adelantar la sucesión presidencial. Cf. Azpiazu, D., *et al.* (2000), *La reestructuración y el redimensionamiento de la producción industrial argentina durante las últimas décadas* (Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires); Levit, C. y R. Ortiz (1999), “La hiperinflación argentina: prehistoria de los años noventa”, en *Epoca*, N° 1 (Buenos Aires).

<sup>xxiv</sup> Cf. Beccaria, L., *op. cit.*, pág. 331.

<sup>xxv</sup> Cf. Camou, A. (1999), “Los consejeros de Menem”, en *Cuadernos del CISH*, N° 5 (UNLP, La Plata), pág. 90. Para una descripción del Consenso de Washington, ver: Williamson, J. (1990), “What Washington means by policy reform”, en J. Williamson (org.), *Latin American Adjustment* (Institute for International Economics, Washington), y Williamson, J. (1996), “The Washington Consensus revisited”, en *Development Thinking and Practice Conference, Main Papers* (Washington).

<sup>xxvi</sup> En palabras de Guido Di Tella: “... no hay duda que nuestra posición debe ser categórica, en el sentido de hacer retroceder tanto como se pueda la gestión y si se puede la propiedad estatal en la producción de bienes y servicios. Esta no es la función del Estado, no lo hace bien... Dejemos que los sectores privados y el mercado determinen si el país tendrá un sector de máquinas herramientas más próspero o menos próspero que un sector de turbogeneradores”; en *Algunas ideas para el Plan Económico 1989*, citado por Camou, A., *op. cit.*, pág. 87.

<sup>xxvii</sup> Cf. Gerchunoff, P. y J. C. Torre (1996), “La política de liberación económica en la administración de Menem”, en *Desarrollo Económico*, N° 143, (Buenos Aires), pág. 736.

<sup>xxviii</sup> Cf. *Boletín Oficial de la República Argentina* del 28/3/91.

<sup>xxix</sup> Cf. INAP (1997), *Organización del Estado y de la Administración Pública Nacional de la República Argentina* (Buenos Aires), pág. 198.

<sup>xxx</sup> Por ejemplo, los Mercados de Concentración Pesquera, la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. Cf. INAP, *op. cit.*

<sup>xxxi</sup> Cf. Azpiazu, D., *et al.*, *op. cit.*

<sup>xxxii</sup> Cf. Bisang, R., *et al.* (1996), “La transformación industrial en los noventa. Un proceso con final abierto”, en *Desarrollo Económico*, número especial (Buenos Aires).

<sup>xxxiii</sup> Cf. Azpiazu, D., *et al.*, *op. cit.*

<sup>xxxiv</sup> Cf. Bisang, R., *et al.*, *op. cit.*, pág. 208. Así también en Azpiazu (*op. cit.*, pág. 11): “en buena parte de las empresas industriales líderes el componente de producción propia de las ventas perdió peso relativo frente a la comercialización de bienes importados complementarios de los que producen o, incluso, sustitutivos de algunas líneas de producción discontinuadas.”

<sup>xxxv</sup> Para algunos autores, este proceso de estratificación salarial incipiente estaría asociado a dos procesos: de un lado, al cambio en las calificaciones requeridas por el nuevo perfil tecnológico del sector productivo doméstico; del otro, al incremento de requerimiento de credenciales educativas para desempeñar el mismo puesto, que los empleadores lograron imponer en un contexto de elevado desempleo. Cf. Altimir, O. y L. Beccaria, *op. cit.*, pág. 612.

<sup>xxxvi</sup> Cf. Sidicaro, R. (2001), *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)* (Libros del Rojas, Buenos Aires).

<sup>xxxvii</sup> Cf. Damill, M., *et al.* (2002), *Argentina. Una década de convertibilidad* (OIT, Santiago de Chile); Damill, M. (2000), *El balance de pagos y la deuda externa pública bajo la convertibilidad* (CEDES, Buenos Aires).

<sup>xxxviii</sup> Cf. Gerchunoff, P. y L. Llach, *op. cit.*, pág. 448.

<sup>xxxix</sup> Algunos autores interpretan las opciones de política económica implementadas por el gobierno de Duhalde en el contexto de exacerbación de la puja de intereses del establishment que comenzó a manifestarse al ritmo de la crisis del modelo de la convertibilidad: “Le cedió [el gobierno] a la cúpula de los grupos empresarios locales y extranjeros la salida devaluacionista, la pesificación de sus deudas en divisas con el sistema financiero local...; le cedió al FMI el régimen de flotación cambiaria...; le cedió a los bancos la preservación de su patrimonio estatizando la deuda privada pesificada y mantuvo el régimen privado de fondos de pensión; y, por último, aún resta por saberse lo que ocurrirá con las negociaciones que el gobierno encarará con las privatizadas...”. Basualdo, E., *et al.* (2002), *Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la administración Duhalde* (Instituto de estudios y formación de la CTA, Buenos Aires), pág. 3.

<sup>xl</sup> Novick, M. (2004), “Costos laborales en la Argentina 2003. Un análisis comparativo”, en *Serie de documentos de trabajo*, N° 1 (Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, MTESS, Buenos Aires), pág. 12.

<sup>xli</sup> Diamand, M. (1973), *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia* (Paidós, Buenos Aires).

<sup>xlii</sup> La única excepción a tal evolución, que se observa en octubre de 1999, obedece a una caída en la dispersión de las tasas de desocupación. Ver Gráfico 2.

<sup>xliiii</sup> Este método de descomposición ha sido desarrollado en Altimir, O. y L. Beccaria, *op. cit.*

<sup>xliv</sup> Cf. Altimir, O. y L. Beccaria, *op. cit.*

<sup>xlv</sup> Novick, M., *op. cit.*



---

<sup>xlvi</sup> INDEC (2002), *Comunicado de prensa del 27 de diciembre de 2002* (Buenos Aires). Si bien es ilustrativo, el ejercicio no es del todo adecuado. De no acceder al PJJH, algunos de los beneficiarios –aquellos que tienen otra ocupación secundaria– podrían ser considerados ocupados, otros –que no buscan activamente trabajo– podrían ser incluidos entre los inactivos.

<sup>xlvii</sup> Cf. Calvi, G. y C. Zibecchi (2004), “El Plan Jefes y Jefas. Cambios y continuidades en materia de programas sociales”, en *Textos para pensar la realidad*, N° 5 (La Plata).

<sup>xlviii</sup> El ejercicio contrafáctico es presentado sólo con fines ilustrativos, pues, de no contar con la asignación provista por el PJJH posiblemente muchos hogares habrían contado con ingresos provenientes de otras fuentes.

<sup>xlix</sup> Para un análisis pormenorizado de la eficacia distributiva del PJJH, ver Calvi, G. y C. Zibecchi, *op. cit.*

<sup>1</sup> Si descontamos los ingresos provistos por el PJJH para calcular el CG de la distribución del IPCF para la onda mayo de 2003 el deterioro distributivo se intensifica, alcanzando los 0,560 puntos del indicador.

<sup>i</sup> Esta metodología ha sido utilizada por Altimir, O. y L. Beccaria (2001), “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina”, en *Desarrollo Económico*, N° 160 (Buenos Aires), y por Grandes, M. y P. Gerchunoff (1998), “Distribución del ingreso y mercado de trabajo en el Gran Buenos Aires. 1987-1997”, en *4° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo* (ASET, Buenos Aires).

<sup>ii</sup> Medina, F. (2001), “Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso”, en *Serie estudios estadísticos y prospectivos*, N° 9 (CEPAL, Santiago de Chile).